INFORME 2015 DE REPUBLICA DOMINICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

RESUMEN EJECUTIVO

La República Dominicana es una democracia constitucional representativa. En el 2012 los votantes eligieron a Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como presidente para un mandato de cuatro años. Los observadores internacionales imparciales determinaron que las elecciones fueron generalmente libres y ordenadas a pesar de las irregularidades, incluyendo alegatos de fraude electoral, el acceso desigual a los medios de comunicación, y las deficiencias en el marco legal que regula el uso de los recursos públicos y el financiamiento de las campañas. En ocasiones, las autoridades civiles fracasaron al tratar de mantener un control efectivo de los organismos de seguridad.

El problema más grave en cuanto a los derechos humanos fue la discriminación de los inmigrantes haitianos y sus descendientes. En el 2013, el Tribunal Constitucional dictaminó que los descendientes de aquellas personas que se consideran entraron ilegalmente en el país, la mayoría de los cuales eran de origen haitiano nacidos en República Dominicana, no tenían derecho a la nacionalidad dominicana.

Otros problemas relacionados con los derechos humanos fueron los homicidios extrajudiciales por parte de los organismos de seguridad; las condiciones de hacinamiento y peligrosidad de las cárceles; el arresto y la detención arbitraria; la detención preventiva prolongada; la debilidad del Estado de Derecho; la impunidad de la corrupción; la violencia crónica contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, las violaciones y el feminicidio; la trata de personas; la discriminación contra las personas por su orientación sexual o identidad de género; y la aplicación inadecuada de la legislación laboral.

Aunque en mayo el Gobierno comenzó a desarrollar un plan nacional de derechos humanos, tomando medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, existía una percepción

generalizada de impunidad oficial, especialmente en relación con los altos funcionarios.

Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, incluyendo la libertad de:

a. La privación arbitraria o ilegal de la vida

Ni el Gobierno ni sus agentes cometieron homicidios por motivos políticos. Hubo informes, sin embargo, de que los organismos de seguridad estaban implicados en la comisión de muertes ilegales, injustificadas, o implicadas en el uso excesivo de la fuerza.

Las estadísticas sobre homicidios policiales variaron, pero la información disponible reveló un problema persistente. La Policía Nacional informó que 128 personas murieron en enfrentamientos con la policía al mes de septiembre. De acuerdo con las últimas cifras disponibles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una organización no gubernamental (ONG), estima que, hasta octubre, 160 personas murieron en enfrentamientos con la policía y que el uso ilegal o excesivo de la fuerza fue evidente en más de un 70 por ciento de estas muertes. La ONG de derechos humanos afirmó que, como en años anteriores, la policía empleó la fuerza letal injustificada o ilegal contra algunos presuntos delincuentes.

Aunque los oficiales superiores de la policía defendieron la conducta de la policía debido a la existencia de un ambiente de alto riesgo, los informes de las ONGs resaltaron un alto número de incidentes en que la policía utilizó una fuerza desproporcionada en algunos casos. El 21 de agosto, tres policías y un ex miembro del Ejército dominicano supuestamente atracaron y mataron a Franchesca Lugo Miranda. Las autoridades ordenaron que los presuntos autores fuesen detenidos por un año durante el proceso de investigación, el cual continuaba al finalizar el año.

b. Desapariciones

No hubo informes de desapariciones por motivos políticos.

c. Torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes

Aunque la ley prohíbe la tortura, las palizas y el abuso físico de los detenidos y los presos, hubo informes de que miembros de los organismos de seguridad, principalmente la policía, llevaba a cabo estas prácticas. La Procuraduría General de la República informó que la policía estaba involucrada en incidentes que dieron lugar a mutilaciones o lesiones graves perpetradas contra civiles desarmados. Amnistía Internacional reportó el uso de descargas eléctricas durante el interrogatorio de los detenidos.

La ley establece penas para la tortura y el maltrato físico, incluyendo penas de 10 a 15 años de prisión. En ocasiones los fiscales presentaron cargos contra los policías y militares que supuestamente cometieron abusos físicos y otros delitos relacionados. Los tribunales penales civiles manejan los casos de homicidios y otros delitos graves, como el abuso físico presuntamente cometido por miembros de los organismos de seguridad. Los organismos de seguridad manejan algunos casos de abuso internamente, y las ONGs reportaron que muchos casos de violaciones de los derechos humanos permanecen impunes.

La CNDH informó que la policía utilizó diversas formas de abuso físico y mental para obtener confesiones de sospechosos detenidos. Según las ONGs locales y los medios de comunicación, los agentes de seguridad maltrataron a civiles, a detenidos, condenados, y a los migrantes. De acuerdo con la CNDH, los métodos abusivos utilizados para obtener confesiones incluyeron la asfixia, método donde se cubren las cabezas de los detenidos con bolsas de plástico, golpeándolos con palos de escobas, obligándolos a permanecer de pie durante toda la noche, y golpeándolos con fuerza en los oídos con los puños enguantados o con relleno de muebles, con el objetivo de no dejar rastros. La CNDH recibió quejas de cientos de ex detenidos que alegan que fueron esposados, colgados de barras o por las uñas, utilizando esposas. Asimismo, que fueron golpeados cuando trataron de poner sus pies en el suelo. Otros reportes de abusos incluyeron casos de deportaciones ilegales, el trato degradante de los prisioneros, y redadas masivas que fueron utilizados por la policía como oportunidades para extorsionar.

Los altos mandos policiales tomaron en serio los esfuerzos realizados para tratar de prohibir el abuso físico y el trato inhumano, pero la falta de

supervisión y de entrenamiento en gran parte de los organismos de seguridad y de los sistemas correccionales hicieron fracasar los esfuerzos realizados para contener el problema.

Las autoridades asignaron abogados de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional para supervisar el proceso de investigación, y asegurar que los derechos de los detenidos fueran respetados en los destacamentos policiales de alto volumen y en varias oficinas de la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Condiciones de las cárceles y de los centros de detención

Las condiciones de las cárceles tradicionales oscilan entre regular y extremadamente duras. Las amenazas a la vida y a la salud incluyen enfermedades transmisibles, un deficiente sistema de saneamiento, falta de acceso a los servicios de salud, ausencia de guardias carcelarios debidamente entrenados, y el trato brutal de los internos contra otros internos. Estos problemas se agravan debido al hacinamiento de las cárceles tradicionales y por la incapacidad existente de segregar a decenas de miles de presos preventivos y de reclusos con enfermedades transmisibles existentes entre la población general de la prisión.

De acuerdo con la Dirección de Prisiones, el personal militar y de la policía es el que normalmente vigila las prisiones tradicionales, mientras que un cuerpo de guardias civiles entrenados proporcionan la seguridad en las 20 nuevas cárceles "modelo", conocidos como Centros de Rehabilitación y Corrección (CRC), los cuales, en general, cumplen con las normas internacionales establecidas.

Condiciones físicas: A partir de septiembre había 24,806 reclusos en 39 cárceles, con una capacidad prevista para 14,109. Además, las autoridades determinaron la presencia de presos preventivos en las cinco cárceles de los "Palacios de Justicia", que también incluían los tribunales y las oficinas del Procurador General. Los CRC estaban muy cerca del tope de su capacidad, con una población de 8,726 prisioneros. Prácticamente todas las cárceles tradicionales y los centros de detención estaban superpobladas. Por ejemplo, la cárcel de La Victoria, el mayor centro penitenciario del país y de mayor

hacinamiento, tiene un tercio de la población total de prisioneros - 8,039 internos - en una instalación diseñada para menos de 2,011.

La prisión de La Romana es la única prisión donde existen instalaciones para internos masculinos y femeninos. Asimismo, existen estructuras permanentes y separadas para las internas en las cárceles de Najayo, Baní, y Rafey. El encarcelamiento de policías y ex militares condenados por actividades delictivas se realizaron en áreas especiales de las prisiones o de los palacios de justicia. Sin embargo, los presos preventivos o enfermos no estaban separados de otros internos. Todas las prisiones tenían enfermerías, pero la mayoría de las enfermerías no cumplían con las necesidades de la población interna. En las cárceles tradicionales los prisioneros deben comprar sus propios medicamentos. En algunos casos, la enfermería de un centro pudo haber donado medicamentos para el uso de los internos.

De acuerdo con la Dirección de Prisiones, a partir de septiembre 63 internos murieron en los centros penitenciarios durante el año. Ninguna de las muertes reportadas fue atribuida al abuso de los guardias de las prisiones.

Los informes de malos tratos y de violencia en las prisiones eran comunes, al igual que los informes de acoso, extorsión y de las revisiones inapropiadas realizadas a personas que visitan la prisión. Algunas prisiones permanecieron fuera del control de las autoridades, y hubo acusaciones de tráfico de drogas y de armas, de prostitución y de abuso sexual en los recintos. Los guardianes de las prisiones tradicionales a menudo controlaban sólo el perímetro, mientras que los internos controlaban el interior de las prisiones con sus propias reglas y su sistema de justicia.

El 9 de agosto, tres reclusos en la cárcel del tribunal de San Francisco de Macorís fueron envenenados en un intento de asesinato por parte de otro interno. En octubre las autoridades iniciaron una investigación del caso.

El 16 de octubre, se produjo un motín en la cárcel de La Victoria entre los dos principales grupos criminales del recinto. Un preso murió, mientras que seis reclusos y tres policías resultaron heridos.

Aunque la ley establece que los presos deben estar separados según la gravedad del delito, las autoridades no tienen la capacidad para cumplir con

las leyes establecidas. De acuerdo con estimaciones de la Dirección de Prisiones, el 60 por ciento de los internos se encontraban en prisión preventiva.

En el caso de los CRC, algunos prisioneros con discapacidad mental fueron separados y recibieron tratamiento, incluyendo terapias, dependiendo de sus condiciones. En las prisiones tradicionales no se realizaron esfuerzos para proporcionar servicios a los presos con discapacidad mental.

El hacinamiento y las enfermedades transmisibles fueron problemas graves. La mayoría de las muertes reportadas estaban relacionadas con enfermedades como la tuberculosis y el VIH/SIDA. En noviembre, el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCT) anunció que la causa de la muerte de tres presos en la cárcel de Higüey fue la tuberculosis. Las autoridades visitaron la cárcel y retiraron aproximadamente a 80 reclusos, sospechosos de estar infectados con tuberculosis.

La salud y las condiciones sanitarias eran generalmente pobres, y las prisiones en general no proporcionan atención médica a los presos. Los presos habitualmente dormían en el suelo porque no habían camas disponibles. Las duchas y los servicios sanitarios con frecuencia resultaban inadecuados. Más de 65 presos en la cárcel de Najayo para hombres comparten una ducha e inodoro. La frecuencia de enfermedades entre los presos aumentó debido al hacinamiento. El PNCT declaró que la tuberculosis y el VIH/SIDA eran las enfermedades más comunes entre las poblaciones de los centros penitenciarios. A partir de octubre, 168 presos fueron diagnosticados con tuberculosis y 216 con el VIH/SIDA. Otras enfermedades comunes reportadas incluían resfriados, gripe, bronquitis, infecciones del tracto respiratorio superior, enfermedades intestinales, gastroenteritis, infecciones de la piel, parásitos, hepatitis, diabetes e hipertensión.

De acuerdo con la Dirección de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y el VIH/SIDA, el dos por ciento de la población reclusa era VIH positiva. La Dirección informó que todos los centros del sistema proporcionan servicios de pruebas de VIH/SIDA, y asesoramiento *in situ*. De acuerdo con la Dirección de Prisiones, todos los centros penitenciarios proporcionan tratamiento contra el VIH/SIDA. La CNDH señaló que aunque los CRCs

fueron capaces de proporcionar tratamiento contra el VIH/SIDA, ninguna de las cárceles tradicionales fue debidamente equipada para proporcionarles a los internos dicho tratamiento. Los presos en los centros penitenciarios modelos que reportaron casos graves de VIH/SIDA, u otras enfermedades terminales, fueron transferidos a hospitales de manera temporal y, a menudo, sus condenas fueron cambiadas por arresto domiciliario.

Según el Director General de Prisiones, los reclusos recibieron tres comidas por día pero muchos de los reclusos en las prisiones tradicionales, según los informes, tuvieron que comprar comidas de personas ubicadas en las inmediaciones de la prisión. Algunos internos reciben sus alimentos por parte de miembros de sus familias, o recurrían a la mendicidad. La CNDH informó que en algunas prisiones tradicionales había comida suficiente y agua potable para satisfacer las necesidades de los reclusos.

Administración: El mantenimiento de los archivos de las prisiones era inadecuado, debido principalmente a la falta de recursos.

Los defensores públicos les proporcionaron servicios legales a los presos y, en algunos casos prestaron asistencia en relación con ciertos casos. La Oficina Nacional de Defensa Pública contaba con una sola abogada, Zoila Ovalle, quien como defensora de prisiones tenía como responsabilidad revisar las quejas presentadas por las prisiones de todo el país. Ovalle tenía más de 400 casos en su cartera. Algunas quejas fueron remitidas a la Dirección General de Prisiones.

Monitoreo independiente: El Gobierno permitió las visitas de observadores y de medios de comunicación independientes, financiados y coordinados por ONGs. Manuel María Mercedes, el director de la CNDH, fungió como defensor de los prisioneros. Los prisioneros podían presentar quejas en relación con el trato recibido, de manera verbal o por escrito, y con mucha frecuencia lo hicieron a través de sus familiares, abogados o defensores de los derechos humanos.

Mejoras: El Gobierno logró avances con los nuevos CRC, donde los prisioneros experimentaron mejores condiciones en comparación con otras instalaciones. El Gobierno continuó trabajando en la transición de las cárceles

tradicionales - las cuales albergan el 65 por ciento de la población carcelaria – al nuevo modelo de prisiones. En febrero, la Dirección General de Prisiones inauguró el Centro Integral de Niños en Conflicto con la Ley en la comunidad de Los Alcarrizos. La instalación albergaba a más de 150 jóvenes masculinos en riesgo, proporcionándole atención médica, actividades deportivas, y asesoramiento en relación con su comportamiento. En agosto, las autoridades inauguraron un nuevo CRC para 700 reclusos en la ciudad de San Cristóbal, con camas individuales y espacio para la continuación de sus estudios y para las artes. En septiembre, la Dirección de Prisiones abrió un centro para los internos de edades comprendidas entre los 60 y 65 años. En octubre, la instalación contaba con una población de 84 hombres quienes recibían una nutrición especializada, ejercicios, y servicios de asesoría psicológica.

d. Arresto o detención arbitraria

El código de procedimiento penal prohíbe la detención sin una orden judicial, a menos que el sospechoso sea detenido durante la comisión de un acto criminal o en otras circunstancias especiales. Las autoridades pueden detener a una persona, sin presentarle cargos, hasta 48 horas después de haber sido arrestado. Los arrestos y las detenciones arbitrarias continuaron siendo un problema, y hubo numerosos informes de personas detenidas que posteriormente fueron puestas en libertad con poca o ninguna explicación sobre su detención. De acuerdo con la CNDH, más de 100 personas fueron detenidas arbitrariamente al mes de septiembre. Las ONGs informaron que, aunque algunas detenciones se produjeron como resultado del Plan Nacional de Regularización (ver sección 2.d.), muchos de los detenidos eran dominicanos que las autoridades apresaron en la escena de un crimen o durante redadas de drogas. A muchos de los detenidos se les tomaron sus huellas digitales, fueron interrogados y luego puestos en libertad.

El papel de la policía y del aparato de seguridad

La Policía Nacional, la Policía Turística, el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Autoridad Aeroportuaria y de Aviación Civil, la Policía Metropolitana, el Cuerpo de Seguridad Fronteriza, y las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) conforman las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Interior y

Policía es la institución responsable de tomar las decisiones políticas que afectan a la policía. El Ejército, la Autoridad Aeroportuaria y de Aviación Civil, la Autoridad Portuaria y el Cuerpo de Seguridad Fronteriza se reportan al Ministro de las Fuerzas Armadas; el DNI y la Dirección Nacional de Control de Drogas, conformada por personal de la policía y de las fuerzas armadas, se reportan directamente al Presidente.

La policía se manejó en un ambiente peligroso. El porte de armas fue generalizado, y la tasa de homicidios fue alta, especialmente en las zonas urbanas. El Departamento de la Policía Nacional sobre Información y Estadísticas reportó 1,142 muertes hasta agosto, y la policía justificó el uso de la fuerza letal como una respuesta adecuada a los disparos realizados contra ellos por presuntos delincuentes. Según el Departamento, 31 policías murieron en el cumplimiento de su deber al mes de septiembre.

Las autoridades reportaron despidos o procesaron policías tras haberse determinado que actuaron fuera de los procedimientos policiales establecidos. El Departamento informó que 391 policías fueron despedidos por mala conducta al mes de octubre.

La Unidad de Asuntos Internos investigó acusaciones de mala conducta por parte de miembros de la Policía Nacional. Estos casos estaban relacionados con agresiones físicas o verbales, amenazas, el uso indebido de un arma de fuego, asaltos y robos. La Unidad de Asuntos Internos realizó 1,482 investigaciones de enero a octubre. De éstas, 188 fueron por uso excesivo de la fuerza; 211 por agresión; 137 por amenazas de muerte; y 363 por corrupción. Las investigaciones dieron lugar a recomendaciones para el despido de 391 y 397 acciones disciplinarias. Las autoridades le dieron seguimiento al enjuiciamiento o a la investigación de funcionarios de alto nivel, sospechosos de estar involucrados en actividades delictivas en un grado menor. La Unidad de Asuntos Internos informó que de enero a octubre se recomendaron 20 despidos y 27 acciones disciplinarias para oficiales de alto rango, por la comisión de actividades ilícitas.

El 24 de agosto las autoridades detuvieron a tres agentes de la Policía Nacional y a un ex miembro del Ejército por el asesinato de una joven de 18 años de edad. El asesinato estaba vinculado a un intento de robo en contra de

la joven y sus acompañantes. Este incidente recibió una amplia cobertura mediática y resaltó el clamor público contra el abuso policial y la corrupción. A fin de año los presuntos involucrados en el caso estaban cumpliendo 12 meses de detención preventiva en espera de juicio.

Se ofreció entrenamiento en temas de derechos humanos a militares y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de la Policía Nacional, tanto para su personal de alistados como para sus oficiales. Durante el año el Ministerio de las Fuerzas Armadas proporcionó entrenamiento en el área de los derechos humanos y orientación a los oficiales de diversos rangos, así como a la población civil. El Cuerpo de Seguridad Fronteriza llevó a cabo entrenamiento obligatorio en derechos humanos en sus instalaciones de entrenamiento, para cientos de sus agentes fronterizos. El director de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario informó que la Escuela también entrenó a civiles y a personal de las fuerzas armadas. La escuela también contó con programas a favor de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la población civil del Congreso, de fiscalías, del Tribunal Supremo, de los ministerios del Gobierno, de la Policía Nacional y de la Junta Central Electoral.

Procedimientos de arresto y trato de los detenidos

La Constitución establece que un acusado no puede ser detenido por más de 48 horas sin una orden judicial antes de ser presentado a las autoridades judiciales. También se contempla el recurso de *hábeas corpus*, a través del cual se solicita la libertad de las personas encarceladas de manera ilegal. El código de procedimiento penal establece un límite de tiempo de 24 horas más restrictivo para presentar cargos formales, recurso que fue observado en términos generales. Todo preso detenido por más de 48 horas, sin haber sido formalmente acusado, tiene derecho a presentar un recurso de *hábeas corpus*. El juez que presida dicha audiencia está facultado para ordenar la liberación del prisionero. La decisión del juez para liberar a un preso está sujeta a apelación por parte del fiscal.

La ley también le permite a la policía detener sin orden judicial a una persona detenida en el momento de cometer un delito, o que podría razonablemente estar vinculado a un delito, como en los casos de persecución o presos

prófugos. A veces la policía detuvo a los sospechosos para fines de investigación o interrogatorio por más de 48 horas. La policía suele detener a todos los sospechosos y testigos de un crimen, y utilizan el proceso de investigación para determinar cuáles personas eran inocentes y merecían ser puestas en libertad. Las audiencias exitosas de hábeas corpus redujeron estos abusos de manera significativa.

Aunque anteriormente este recurso sólo se le ofrecía a unos pocos acusados, el recurso de la fianza se hizo más común bajo el código de procedimientos penales, lo que requiere la revisión judicial de las detenciones en un punto anterior en un caso criminal. Algunos de los acusados en libertad bajo fianza se dieron a la fuga. En algunos casos los observadores sospecharon que la concesión de la libertad bajo fianza y la posterior desaparición del sospechoso se debía a la corrupción o a las ineficiencias del sistema judicial.

La ley requiere la provisión de asesoría legal a los acusados indigentes. La Oficina del Defensor Público representó a los acusados en un 80 por ciento de todos los casos penales presentados ante los tribunales. La Oficina Nacional de Defensa Pública proporcionó asesoría y representación legal a personas indigentes, pero las limitaciones de recursos dio como resultado niveles inadecuados de personal, servicios limitados, y bajó la calidad de los servicios prestados. Como resultado, la mayoría de los detenidos y presos que no pueden pagar los servicios de su defensa no tuvieron acceso inmediato a un abogado. En octubre, la Oficina de la Defensa Pública informó que los defensores públicos manejaban entre 350 a 750 casos, el doble o triple del nivel normal de 200 casos.

Los fiscales y los jueces manejan los interrogatorios de los menores. La ley prohíbe el interrogatorio de los menores por o en la presencia de la policía.

Detención Arbitraria: La policía realizó redadas esporádicas o redadas en comunidades de bajos ingresos y de altas tasas de criminalidad, durante las cuales fueron arrestados y se detuvieron a personas sin orden judicial. Durante estas redadas la policía detuvo a un gran número de residentes y confiscaron propiedad personal que presuntamente fue utilizada en actividades criminales.

La Detención Previa al Juicio: Muchos sospechosos sufrieron largos períodos de detención preventiva. Según lo establecido por el código de procedimiento penal, el juez puede ordenar que un detenido permanezca bajo custodia policial entre tres y 18 meses. Según la Dirección de Prisiones, el 60 por ciento de los internos eran presos preventivos. El tiempo promedio de detención preventiva fue de unos tres meses, pero hubo casos de detención preventiva que duraron hasta un año. El tiempo cumplido en prisión preventiva cuenta para completar una condena. El Ministerio Público continuó con la implementación de un sistema de seguimiento automático de casos que les permite a los fiscales darle seguimiento a los casos de detención preventiva con mayor eficacia. Aunque no es su objetivo principal, el sistema reduce el número de ocasiones en que la detención preventiva excedió el plazo legal. La CNDH informó que el 65 por ciento de los reclusos en el viejo sistema penitenciario, y el 45 por ciento de los internos en el nuevo sistema penitenciario, eran presos preventivos.

El fracaso de las autoridades carcelarias de presentar a los detenidos ante los tribunales provocó aplazamientos. Muchos de los internos vieron posponer sus citas ante los tribunales debido a que no fueron trasladados de la prisión a los tribunales, o porque sus abogados, coacusados o testigos no se presentaron. La CNDH informó que aproximadamente el 60 por ciento de los presos no fueron llevados a los tribunales en la fecha prevista y que, de los que se presentaron ante el tribunal, casi todos fueron obligados a pagar por su transporte o pagar un soborno a los guardias de prisiones para ser transportados al tribunal para la lectura de los cargos o la realización del juicio. El Gobierno no proporcionó financiamiento para transportar a todos los acusados entre la prisión y el tribunal. A pesar de que el código procesal penal le garantiza garantías adicionales a los acusados, en algunos casos las autoridades detuvieron a los internos más allá de los plazos legalmente establecidos, aunque no se presentaron cargos formales contra ellos.

El sistema judicial creó oficinas de servicios en varias ciudades para manejar asuntos urgentes que requerían de la presencia de un juez, como por ejemplo la obtención de una orden de registro o la realización de la lectura de cargos. Estas oficinas de servicios judiciales forman parte de un esfuerzo realizado

para aumentar la eficiencia y reorganizar los tribunales para que cumplan con el código procesal penal.

Detención prolongada de solicitantes de asilo rechazados o apátridas: Hubo casos aislados de solicitantes de asilo que fueron detenidos debido a la falta de documentación (ver secciones 2.d. y 6).

e. Denegación de un juicio público imparcial

La ley establece un poder judicial independiente. Sin embargo, a pesar de que la independencia judicial ha aumentado, los casos de influencia política en la toma de decisiones aún eran evidentes. La interferencia tiende a limitarse a las declaraciones públicas en relación con casos activos y procesamientos selectivos. En ocasiones, parecía que los jueces de los tribunales superiores intentaron influir en las decisiones de los tribunales inferiores. Además, la corrupción judicial es un problema grave (ver sección 4).

Procedimientos judiciales

La ley establece la presunción de inocencia, el derecho de apelación, y el derecho a confrontar o interrogar a los testigos. La ley establece el derecho del ciudadano a no ser privado de su libertad sin la realización de un juicio, del cumplimiento de formalidades legales, o por razones distintas de las previstas por la ley, el derecho a la no autoincriminación, y el derecho a la defensa en un juicio imparcial y público. Los acusados tienen derecho a permanecer en silencio. La ley también le garantiza un abogado de la defensoría pública para cada persona que no pueda pagar un abogado, pero debido a la falta de personal la demanda no se pudo cumplir. Los juicios son públicos, pero no se utilizan los jurados. De acuerdo con la Constitución y la ley, los acusados tienen derecho a estar presentes y consultar con un abogado de manera oportuna. La Constitución también establece el derecho a la apelación y le prohíbe a los tribunales superiores la elevación de las sanciones de los tribunales inferiores.

Hubo denuncias creíbles de que en algunos casos las autoridades violaron estos derechos, pero mejoró la adherencia al debido proceso ya que las autoridades se familiarizaron más con las modificaciones realizadas al Código Procesal Penal. La Oficina del Procurador Fiscal debe notificar al acusado y a

su abogado de los cargos criminales, así como las pruebas que la Fiscalía presentará ante el tribunal. Los acusados y abogados tienen acceso a las pruebas que están en manos de las autoridades judiciales y pueden confrontar a los testigos adversos, pero sólo después de la audiencia preliminar y luego que el juez haya aprobado la acusación. Los acusados tienen derecho a presentar sus propios testigos y pruebas.

Los tribunales militares y de la policía comparten jurisdicción sobre los casos que involucran a miembros de los organismos de seguridad. Mientras que los tribunales tienen jurisdicción sobre los casos de violaciones a las normas y de los reglamentos internos, los tribunales penales civiles manejan los casos de homicidios y otros delitos graves presuntamente cometidos por miembros de los organismos de seguridad.

Los presos y los detenidos políticos

No hubo informes de prisioneros o detenidos políticos.

Los procedimientos y recursos judiciales civiles

Hay sistemas judiciales separados para las reclamaciones en virtud del derecho penal, derecho mercantil y civil, y el derecho laboral. Los tribunales comerciales y civiles fueron supuestamente sometidos a largas demoras en la adjudicación de casos, aunque en general sus decisiones se aplicaron. Al igual que en los tribunales penales, la indebida influencia política o económica en las decisiones de los tribunales civiles continuó siendo un problema.

Los ciudadanos contaban con el "recurso de amparo", una acción establecida para solicitar la reparación de cualquier violación de un derecho constitucional, incluyendo las violaciones de los funcionarios judiciales. Este recurso, en general, sólo fue utilizado por aquellos que contaban con el respaldo de abogados sofisticados.

f. La interferencia arbitraria en la vida privada, familiar, hogareña o en la correspondencia

La ley prohíbe la entrada arbitraria a una residencia privada, salvo cuando la policía esté en persecución de un sospechoso, cuando un sospechoso es

sorprendido en el momento de cometer un delito, o si la policía sospecha que una vida está en peligro. La ley establece que todas las otras entradas en los hogares requieren de una orden de detención o de registro emitida por un juez. Sin embargo, la policía llevó a cabo registros e incautaciones ilegales, incluyendo redadas sin orden judicial en residencias privadas en muchos barrios pobres.

Aunque el Gobierno niega el uso de interceptaciones telefónicas no autorizadas, el seguimiento a los correos electrónicos privados, u otros métodos subrepticios de interferencia en la vida privada de los individuos y las familias, los grupos de derechos humanos y políticos de oposición alegaron que dicha interferencia continuó.

Sección 2. Respeto a las libertades civiles, incluyendo:

a. Libertad de expresión y prensa

La Constitución establece la libertad de expresión y de prensa y, en general, el Gobierno respetó estos derechos.

La prensa y las libertades de los medios: Los medios independientes fueron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista con algunas restricciones. La ley penaliza la difamación y el insulto con castigos más severos para los delitos cometidos contra figuras públicas o estatales que para los delitos contra particulares. Una demanda en el Tribunal Constitucional, solicitando la anulación de varios artículos del Código Penal y de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento que restringen la libertad de prensa, seguía pendiente. En términos generales, los individuos y los grupos pudieron criticar al Gobierno, tanto públicamente como en privado, sin represalias, aunque hubo varios incidentes en que las autoridades intimidaron a los periodistas u otros profesionales de la información.

Violencia y acoso: En ciertas ocasiones, los periodistas y otras personas que trabajan en los medios de comunicación han sido acosados o atacados físicamente.

En julio las autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver del periodista Blas Olivo, quien desapareció en abril después de participar en una actividad

familiar. El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas afirmó que la muerte de Olivo fue un asesinato premeditado, y el Colegio le presentó al Presidente Medina una solicitud formal para una nueva investigación en relación con la muerte de Olivo. Las autoridades detuvieron a varios sospechosos en el caso y los acusó de robo y asesinato. A finales de año el juicio seguía pendiente a finales de año.

Durante el año varios periodistas informaron haber recibido amenazas de muerte, debido a las historias que estuvieron cubriendo. El 12 de agosto, Franklin Guerrero, periodista y fotógrafo para televisión y radio de NCDN, informó que recibió amenazas de muerte de una de las ex esposas de un senador que estaba siendo juzgado por malversación de fondos.

Censura o restricción de contenido: La Constitución establece la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas e incluye una "cláusula de conciencia", lo que permite que los periodistas se nieguen a cubrir ciertas informaciones. No obstante, los periodistas practicaron la autocensura, particularmente cuando la cobertura podía afectar de manera negativa los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios de comunicación. Los medios de comunicación limitan la revelación de los nombres de los periodistas que cubren historias relacionadas con el narcotráfico y otros asuntos de seguridad para protegerlos.

Impacto no-gubernamental: El 2 de febrero, cuatro periodistas - Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora, Amelia Deschamps y Roberto Cavada - conocidos por tomar una posición firme contra la discriminación en contra de los dominicanos de ascendencia haitiana, informaron haber recibido una serie de amenazas y actos de acoso. Cavada informó que el 10 de enero fue seguido por un desconocido que a gritos le llamó "traidor de la patria" en un supermercado y gritó, "vamos a matar a todos los traidores y los primeros serán los periodistas". El 16 de enero un hombre no identificado le gritó a Deschamps en un supermercado en Santo Domingo, ¡"A usted es a la primera que hay que matar"! Asimismo, el 26 de enero, durante una protesta organizada por grupos nacionalistas en la ciudad de Santiago, a Lora y a Díaz le dijeron ¡"Todos ustedes son traidores de la patria!" Un hombre declaró en la

televisión que "los traidores de la Patria merecen la muerte" y específicamente nombró a Díaz, a Lora, y a Cavada.

Libertad en Internet

No hubo restricciones gubernamentales sobre el acceso a Internet, ni se presentaron informes creíbles de que el Gobierno monitoreaba los correos electrónicos o *chats* de Internet sin la autoridad legal apropiada. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 50 por ciento de los ciudadanos usó el internet en el 2014.

Libertad académica y eventos culturales

No hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad académica o eventos culturales.

b. La libertad de reunión pacífica y libertad de asociación

La ley establece la libertad de reunión. Las marchas y reuniones públicas requieren de permisos que, generalmente, el Gobierno concedió. En varias ocasiones, la policía usó la fuerza para dispersar manifestaciones y mataron o hirieron algunos manifestantes. La CNDH reportó que unas tres personas murieron y 100 resultaron heridas al intentar dispersar diversas manifestaciones durante el año.

En septiembre, la Policía Nacional presuntamente mató a Luis Ramón Peña de Jesús en la comunidad de Saona durante una serie de protestas que se llevaron a cabo en varias ciudades. Los manifestantes exigían mejoras en el suministro de agua potable y en el servicio energético, en la construcción de carreteras, así como en los servicios de bomberos y ambulancias. Una investigación iniciada por Asuntos Internos de la Policía Nacional continuaba al finalizar el año.

Libertad de asociación

La ley establece la libertad de asociación, y en términos generales el Gobierno respetó este derecho (véase el apartado 7.a.).

c. Libertad de religión

Ver el Informe del Departamento de Estado sobre la *Libertad Religiosa Internacional*, en www.state.gov/religiousfreedomreport/.

d. Libertad de circulación, desplazamiento de personas a lo interno, protección de refugiados y personas apátridas

La ley establece la libertad del movimiento interno, los viajes al extranjero, la emigración y la repatriación, y el Gobierno generalmente respetó estos derechos, salvo algunas excepciones.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) presentó recomendaciones para determinar la condición de refugiados en casos individuales para la consideración de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). Al ACNUR no se le permitió participar en las sesiones de la comisión donde se dirimían las solicitudes de refugio.

Durante el año, el ACNUR realizó entrenamientos sobre el tema de asilo con el Cuerpo de Seguridad Fronteriza, con funcionarios de migración y con los inspectores en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes en los procesos de inmigración. El ACNUR se enfocó en los procedimientos de asilo y repatriación.

Movimientos internos en el país: Los grupos de derechos humanos locales e internacionales informaron que existía la posibilidad de que cientos de miles de personas, sin la documentación adecuada - incluidos los migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana nacidas en el país - enfrentaban obstáculos para viajar dentro y fuera del país.

En el 2011, el entonces Presidente Leonel Fernández promulgó algunas regulaciones que parcialmente implementaba la Ley de Migración de 2004. Ambas extendieron la excepción de estar "en tránsito" a la ciudadanía dominicana a aquellas personas nacidas en el país a los hijos de inmigrantes ilegales y estableció el Plan Nacional de Regularización, que entró en vigor en el 2014. Las regulaciones definen los organismos burocráticos que tienen a su cargo los asuntos migratorios, incluyendo el registro de todos los extranjeros en el país; el mandato de la inscripción de los niños nacidos de padres extranjeros no residentes en un registro especial (el Libro de Extranjería); el establecimiento de los requisitos para la obtención de la residencia legal, el

diseño de un esquema para la importación de mano de obra temporal (haciendo que los empleadores se responsabilicen de la devolución de los trabajadores que traen al país) y reiterar, de manera explícita, una política que someta a todos los inmigrantes irregulares a la deportación. En enero de 2014, el Gobierno suspendió las deportaciones para dar a los migrantes irregulares la oportunidad de participar en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. El período de solicitud para recibir los beneficios del Plan terminaron en junio; el 14 de agosto, el Gobierno reanudó las deportaciones.

El Plan Nacional de Regularización concedió el estatus de residencia temporal a aproximadamente 240,000 migrantes irregulares, un 98 por ciento proveniente de Haití. De acuerdo con los datos del censo, es posible que hasta 280,000 inmigrantes haitianos no solicitaron o clasificaron para la regularización de su estado migratorio, y quedaron sujetos a la deportación. El Gobierno siguió aplicando lentamente su plan de deportaciones, posterior a la regularización, reportando un total de aproximadamente 7,400 deportaciones entre agosto y octubre. Entre julio y octubre funcionarios de la ONU realizaron más de 15 misiones a los cuatro cruces fronterizos principales y a siete centros de acogida para observar el proceso de repatriación del Gobierno. Los funcionarios de la ONU también acompañaron a las autoridades de migración durante los procedimientos de interceptación llevadas a cabo en diferentes provincias. De acuerdo con las Naciones Unidas, los procedimientos que se observaron fueron ordenados, legales, e individualizados, en cumplimiento con las normas internacionales de derechos humanos. El Gobierno invitó a la comunidad internacional a observar y comentar sobre las deportaciones. El Gobierno tiene en funcionamiento cinco centros de detención de inmigrantes. El centro de Haina, en San Cristóbal, era el único que existía en el 2014.

Protección de los refugiados

El acceso al asilo: La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado, y el Gobierno tiene un sistema para proporcionar protección a los refugiados, pero no lo ha puesto en práctica de manera efectiva. Un solicitante para la condición de refugiado debe ser referido por la Oficina Nacional de Refugiados, de la Dirección de Migración, a la Subcomisión Técnica de

CONARE, que preside el Ministerio de Relaciones Exteriores. El subcomité es el responsable de hacer recomendaciones a la comisión, que está conformada por miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, el DNI, y la Dirección General de Migración (DGM). El pleno de la comisión tiene la responsabilidad de tomar la decisión final sobre las solicitudes.

En el 2013, el CONARE aprobó una resolución que exigía que las personas solicitaran asilo dentro de los 15 días de su llegada al país. La resolución amplió el alcance de la fecha límite de 15 días a todas aquellas personas que buscaban asilo al autorizar a la Oficina Nacional para Refugiados (ONR) de la DGM para realizar una determinación de inadmisibilidad si una solicitud de asilo no proporcionó ninguna de las causas que dan lugar al reconocimiento de la condición de refugiado. Además, en virtud de la resolución, si un solicitante de asilo permanece en el país por más de 15 días y no solicita el asilo antes de tratar de llegar a un tercer país en el que se podría conceder el asilo, la solicitud de la persona es declarada extemporánea e inadmisibile. La resolución también autoriza a la ONR declarar inadmisibile una solicitud de asilo de un individuo que ha estado en, o proviene de, un país extranjero en el que el individuo pudo haber solicitado asilo. La decisión de inadmisibilidat no se puede apelar, lo que restringe la capacidad de un solicitante para acceder a determinados procedimientos (como una entrevista de asilo y la evaluación por parte del CONARE) al desestimar la pretensión del solicitante, previa presentación, y prohibiendo recurrir a la decisión.

La resolución 2013 le da, efectivamente, a una sola persona, el jefe de la ONR, el poder administrativo para declarar inadmisibile una solicitud, en base a su evaluación, y sin haber llevado a cabo una entrevista de asilo. En el caso de una decisión de inadmisibilidat administrativa, el proceso ofrece pocos recursos para el solicitante lo que aumenta el riesgo de retorno forzado.

No hubo información con respecto a los procesos específicos vigentes para responder a las solicitudes de asilo en los puertos de entrada. Los directores de la ONR, así como del Departamento de Deportaciones, informaron que los agentes de migración fueron entrenados y que se han establecido los procedimientos para identificar a los solicitantes de asilo, aunque los procesos

exactos no fueron hechos públicos. La ONR declaró que no recibió ninguna solicitud de asilo en los puertos de entrada.

Hasta finales de abril, los solicitantes de asilo detenidos tenían acceso a los representantes del ACNUR. Antes de eso, las autoridades concedieron al CNDH acceso periódico al Centro de Detención para Migrantes. A estos detenidos, cuando pudieron hacer contacto personal con un abogado, se les concedió acceso a un abogado. Históricamente, los abogados sólo han podido asistir a los detenidos sirviéndoles como garantes, no a través del proceso de solicitud de asilo. Las políticas de CONARE no ofrecen protección para el chequeo durante el proceso de expulsión. Por ley, el Gobierno debe garantizar el debido proceso a los solicitantes de asilo detenidos. Aquellos que expresan temor de retornar a su país de nacionalidad o de residencia habitual se le refieren a la ONR y se le permite solicitar asilo de acuerdo con los procedimientos adecuados. En general, no hubo revisión judicial de las órdenes de expulsión. Por otra parte, no hubo revisión de terceros para garantizar el proceso de revisión para proteger al solicitante.

La ONR declaró que los intérpretes se proporcionarían de forma gratuita. Un solicitante de asilo informó que un miembro del personal, con manejo del idioma inglés, llevó a cabo la entrevista. Otro solicitante de asilo informó que se le pidió que utilizara a un amigo acompañante para fines de interpretación. Otro informó que a otro detenido se le pidió que fungiera como intérprete.

Si bien no hubo prohibición de representación legal en los reglamentos del CONARE, no estaba claro si a los solicitantes se les permitiría tener un abogado, ya que ninguna solicitud de asilo ha llegado a la ONR con representación legal. El ACNUR indicó que ningún abogado de defensoría pública u ONGs estuvieron disponibles para proporcionar la representación legal en el proceso de determinación de la condición de refugiado y que los abogados privados carecen de experiencia y conocimientos sobre el derecho de los refugiados.

El CONARE no les proporcionó a los solicitantes de asilo rechazados detalles de los motivos de la desestimación de su solicitud inicial de asilo, ni les ofreció información relacionada con el proceso de apelación. Las decisiones del CONARE se comunicaron a través de una resolución donde se

enumeraban los solicitantes de asilo cuya solicitud había sido concedida, así como las que habían sido rechazados. Los solicitantes rechazados no recibieron una carta detallando los motivos de la desestimación. En cambio, la ONR emitió una carta donde le informaba a los solicitantes sobre el rechazo de sus solicitudes de asilo y que tenían 30 días para abandonar el país de manera voluntaria. La carta no le informaba al solicitante de asilo sobre sus derechos, sobre la presentación de una apelación dentro de los siete días calendario, siguiente a la recepción de la carta de notificación de la ONR. Para apelar, un solicitante de asilo debe presentar una declaración escrita a la ONR sobre el por qué presentan la apelación a los siete días calendario siguientes a la recepción de la notificación de la ONR.

Cualquier apelación que no sea presentada a tiempo se consideró inadmisibles por la ONR. El CONARE sólo puede compartir, a través de una resolución, su análisis de un caso y detallar los motivos de rechazo después de la solicitud de apelación. Los reglamentos del CONARE no prevén ningún otro derecho de recurso o la apelación de un rechazo.

El ACNUR informó que durante el año la Dirección de Migración llevó a cabo una evaluación de todas las personas registradas de que recibieron el estado de refugiado e intentó verificar a estos individuos con las diversas resoluciones del CONARE sobre la condición de refugiado en años recientes.

Según el ACNUR, en octubre había aproximadamente 600 refugiados bajo su mandato. El ACNUR también estimó que había 313 solicitantes de asilo en el país. La mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo eran de nacionalidad haitiana, pero también eran refugiados de Cuba, Irán, Irak, Sri Lanka y Siria.

La CNDH, asistidos por el ACNUR, representó a tres haitianos quienes previamente habían sido reconocidos como refugiados por el CONARE. Sin embargo, sus solicitudes fueron desestimadas debido a supuestos cambios en las condiciones en Haití. Sus apelaciones administrativas estaban pendientes ante la Oficina del Presidente y del Tribunal Superior Administrativo.

Devolución: No existen medidas de seguridad para impedir el retorno forzado de los solicitantes de asilo, o refugiados, a países donde su vida o su libertad puedan estar amenazadas. Aunque el Gobierno proporcionó cierta protección

contra este tipo de devoluciones, el riesgo de expulsión se mantuvo. La protección aplicaba generalmente a aquellas personas que tuvieron acceso al proceso de refugiado y que habían recibido pruebas de que eran refugiados o que tenían solicitudes pendientes. Debido a la falta de formación, el ACNUR señaló que existía el riesgo de que no todos los funcionarios en capacidad para detener a una persona reconocería y respetaría sus documentos y sus derechos contra la detención y la deportación.

Los solicitantes de asilo que no presenten su solicitud dentro de la ventana disponible de 15 días, o cuyas solicitudes fuesen declaradas inadmisibles, no están protegidos contra el proceso de devolución. El ACNUR indicó que el 8 de octubre cinco cubanos presentaron solicitudes de asilo, quienes estaban detenidos en un centro de migración y quienes habían presentado solicitudes oportunas ante la ONR. Fueron sumariamente considerados inadmisibles como migrantes económicos y fueron deportados a Cuba sin previo aviso al ACNUR, a pesar de que la institución había advertido que los individuos eran personas de interés para el ACNUR.

Empleo: La falta de empleo remunerado fue un problema, y el empleo fue un requisito para la renovación de una tarjeta de residencia temporal por el CONARE.

Acceso a los servicios básicos: A los refugiados se les ofrecen los mismos derechos y responsabilidades que los inmigrantes legales con permiso de residencia. Esto les proporcionó a los refugiados el derecho a acceder a la educación, al empleo, a servicios de salud, y a otros servicios sociales. El ACNUR informó que, en la práctica, los desafíos se mantuvieron. Sólo aquellos refugiados capaces de pagar un seguro médico pudieron recibir atención médica adecuada. Otros servicios, como abrir una cuenta bancaria y firmar contratos para recibir servicios públicos básicos, eran difíciles de obtener debido a que a menudo tomaba meses, incluso años, para reconocer el permiso de residencia temporal de un año de un refugiado.

Los refugiados pueden solicitar la reunificación familiar. El ACNUR informó que el proceso fue complicado y presentó muchos retos. Un refugiado primero debe esperar dos años a partir de la fecha de ser reconocido como refugiado antes de presentar una petición familiar. Un refugiado entonces debe cumplir

con una serie de requisitos en relación con los ingresos, activos, y empleos. Otras ONGs informaron que los requisitos tornan casi imposible la reunificación familiar.

Las resoluciones del CONARE facilitaron el derecho de todos los refugiados reconocidos de recibir un pasaporte o documento de viaje. En la práctica, sin embargo, esto resultó ser un reto para los pocos refugiados reconocidos por el CONARE. El ACNUR informó de que estos refugiados esperaron más de dos años para recibir sus documentos de viaje, y varios de ellos ya habían pagado los derechos para obtener sus pasaportes. Tal y como declarara un oficial de la Dirección General de Pasaportes a través del ACNUR, el Gobierno nunca antes había emitido un documento de este tipo y, como tal, el Gobierno tuvo que producir un nuevo documento para cumplir con los requisitos internacionales.

El ACNUR informó que los refugiados expresaron que su derecho a la libertad de movimiento había sido violado y que se habían encontrado sin la posibilidad de viajar y visitar a sus familiares en otros países.

De manera habitual las autoridades les negaron certificados de nacimiento, acceso a la educación, a la salud, a la seguridad a los niños de padres haitianos. No había otras formas de protección complementaria o subsidiaria más allá de la condición de refugiado.

Apátridas

La Constitución de 2010 establece que toda persona nacida en el país es un ciudadano, excepto los hijos de diplomáticos, los niños nacidos de padres que están "en tránsito", o los niños nacidos de padres que están ilegalmente en el país. En 2005, el Tribunal Supremo confirmó la Ley General de Migración de 2004, la cual redefinió el término "en tránsito" de ser un extranjero que ingresó al país para llegar a otro destino y a todos los trabajadores temporales, y más tarde a los migrantes irregulares. Según la ley, la excepción Constitucional que negaba la ciudadanía a los hijos nacidos en República Dominicana de personas en tránsito ya no se aplicaba sólo a los padres que estaban en tránsito en el país por un período de 10 días o menos, sino que aplicaba a todos los no-residentes con un estado de "tránsito". La ley define

ampliamente a los no residentes, e incluye a turistas, estudiantes, trabajadores temporales extranjeros y migrantes irregulares. El Registro Civil, gestionado por la Junta Central Electoral (JCE), de manera retroactiva aplicó la ley de migración y se negó a emitir nuevos documentos de identidad o renovar la documentación caducada a aquellos que se sospechaban eran hijos de padres extranjeros que no habían probado su residencia o estado legal en el país, asegurando que recibieron certificados de nacimiento incorrectos.

Incluso antes de la aplicación de la Constitución, según la nueva definición de 2004, las autoridades les negaron la ciudadanía a los hijos de los migrantes irregulares. Antes de 2004, las leyes de migración concedieron privilegios a los extranjeros "en tránsito" que ingresaron al país "con el principal propósito de proceder a través del país a un destino exterior". En 2007 la JCE estableció un sistema de registro, conocido como el "Libro de Extranjería", que permitía que los niños nacidos en el país, de padres que no eran residentes legales, recibieran un certificado de nacimiento especial. Estos niños, cuyos padres tenían documentación de su país de origen, podían ser inscritos en el libro. Los padres, a su vez, recibirían un reporte oficial de nacimiento que no confiere la ciudadanía. Las ONGs locales e internacionales informaron que, desde la implementación del Libro de Extranjería, los hospitales y los registros civiles no registraron numerosos hijos de inmigrantes haitianos y sus descendientes. Se estima que entre 10,000 y 20,000 niños les nacían anualmente a migrantes haitianos y sus descendientes, pero pocos de los niños inscritos en el Libro de Extranjería eran de ascendencia haitiana. Las ONGs informaron que algunos padres haitianos, que estaban en el país legalmente y cuyos hijos eran ciudadanos ante la ley, estaban obligados a inscribir los nacimientos de sus hijos en el Libro de Extranjería.

Al mismo tiempo, las autoridades del registro civil comenzaron a revisar el estado legal y la documentación civil de los dominicanos de ascendencia haitiana. Muchas de estas personas nacieron en territorio nacional en un momento en que generalmente se aceptaba que la Constitución le garantizaba la ciudadanía por medio del *jus soli*. Desde el 2007, sin embargo, las autoridades han adoptado fuertes medidas para otorgar la ciudadanía a las personas de ascendencia haitiana nacidas en el país y cuyos padres no podían comprobar su estada legal en el país. Estas medidas incluían la negativa de

renovar actas de nacimiento y documentos de identidad dominicanos, lo que provocó una apatridia legal. El Gobierno declaró que estas negativas se basaron en la presentación de pruebas de documentación fraudulenta, pero los grupos de defensa alegaron que dichas acciones estaban dirigidas a personas cuyos padres eran haitianos o cuyos nombres sonaban haitianos, por lo que estos hechos constituían actos de desnacionalización.

Como resultado de estas políticas, los descendientes de los inmigrantes haitianos que trabajaron y se establecieron en el país a lo largo del siglo 20 – y que nacieron en el país antes de 2010 y que les correspondía el derecho a la ciudadanía dominicana – confrontaron un alto riesgo de convertirse en apátridas. Esto se ve agravado por el hecho de que, hasta el año 2012, la Constitución no permitía la doble ciudadanía. Las personas de ascendencia haitiana que obtuvieron la nacionalidad dominicana perdieron su derecho a la ciudadanía haitiana. Además, la obtención de la ciudadanía haitiana en el marco del *jus sanguinis* podría plantear problemas para las personas cuyos padres habían perdido vínculos significativos con Haití, o no tenían pruebas de su ciudadanía haitiana debido a su larga presencia en el país. Estos problemas se tornaron más graves para las personas de segunda y tercera generación nacidas en el país.

En 2013, el Tribunal Constitucional dictaminó que los niños nacidos en el país de padres extranjeros "en tránsito" no eran considerados ciudadanos dominicanos. El Tribunal ordenó a la JCE a comprobar su registro de nacimientos a partir del 1929 para identificar a los extranjeros que podrían estar registrados de manera incorrecta y transferirlos a una lista separada de registro de nacimiento extranjera. El tribunal señaló que los extranjeros en tránsito pueden modificar su estado de inmigración para obtener la residencia legal permanente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ACNUR y la Comunidad del Caribe expresaron su profunda preocupación por la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el 2013. La CIDH realizó una visita *in situ* al país en el 2013, y sus conclusiones preliminares consideraron que la resolución del Tribunal de 2013 implicaba una privación arbitraria de la ciudadanía y que la sentencia tuvo un efecto discriminatorio donde despojaba

a la ciudadanía despojada de manera retroactiva, y dio lugar a la apatridia para los ciudadanos de los individuos que no se consideran.

En mayo de 2014, el Presidente firmó y promulgó la Ley 169-14 sobre el “Status Especial de Individuos Nacidos Dentro del Territorio con Registro Irregular en el Registro Civil y Sobre Naturalización”. El 29 de julio, el Gobierno inició la implementación de la ley. La Ley 169-14 propone regularizar y volver a emitir los documentos de identidad a los aproximadamente 24,392 individuos, nacidos de padres "en tránsito" en el país entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril de 2007, y que fueron previamente inscritos en el registro civil (Grupo A), y reconocerlos como ciudadanos dominicanos desde el nacimiento. Tras realizar una auditoría exhaustiva de los archivos nacionales de registro civil, ese número aumentó a 54,307. La ley también creó una ruta especial para que aquellas personas nacidas de padres “en tránsito”, y que nunca fueron inscritos en el registro civil, pudiesen obtener la ciudadanía, incluyendo un estimado de 55,000 a 80,000 personas indocumentadas, principalmente de linaje haitiano (Grupo B). Las personas del Grupo B tuvieron que demostrar que nacieron en el país antes del 18 de abril de 2007, cuando se inició el proceso del Libro de Extranjería. Sus nombres, posteriormente, se podrían inscribir en ese registro. Una vez inscritos los miembros del Grupo B podrían comenzar el proceso para obtener un permiso de residencia permanente. Después de dos años, pueden solicitar la naturalización. El primer período de solicitud de 90 días para el Grupo B terminó el 26 de octubre de 2014. Una enmienda presentada en noviembre de 2014 amplió el plazo por 90 días más. El 31 de enero, al cierre del período de solicitud, 8,755 individuos del Grupo B aplicaron. A partir de noviembre, el Gobierno aprobó 6,262 casos y continuó procesando los casos restantes.

El 26 de junio, la JCE publicó los resultados de una auditoría interna de los hijos de inmigrantes "en tránsito" que habían sido indebidamente inscritos en el registro civil que data del año 1929 (Grupo A). La auditoría dio como resultado una lista de 54,307 nombres. La JCE anunció que los registros civiles de estas personas fueron reinscritos en un libro independiente del registro civil y sus registros civiles originales fueron anulados. La JCE invitó a aquellas personas que aparecían en la lista a presentarse en las oficinas de la

JCE a recoger un nuevo certificado de nacimiento. La gran mayoría de las personas en la lista era de ascendencia haitiana. A partir de septiembre, la JCE informó que había emitido 14,000 (o el 26 por ciento) de los certificados de nacimiento de los que se habían vuelto a inscribir 54,307 personas del Grupo A. Los grupos de la sociedad civil informaron que muchos del restante 74 por ciento de los individuos continuaron experimentando dificultades para obtener los nuevos certificados de nacimiento emitidos en las oficinas de la JCE. Las ONGs también documentaron casos de personas que, según ellos determinaron, calificaban dentro del Grupo A y no se incluyeron en la lista de resultados de la auditoría de la JCE, a pesar de la JCE anuló sus registros civiles por haber sido incorrectamente inscritos. No hubo ninguna estimación global del tamaño de esta población.

El Gobierno declaró públicamente que buscaría una solución para cualquier individuo que calificara, pero que no solicitó ni se benefició de la Ley 169-14 y que dicha solución reflejaría los caminos para lograr la ciudadanía jurídica creada en virtud de dicha ley. El Gobierno también declaró que no deportaría a ninguna persona nacida en el país.

Un estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas y del Fondo de Población de las Naciones Unidas, emitido en el 2012, estimó que la población de ciudadanos haitianos en el país era de 668,145. De estos, 458,233 fueron identificados como inmigrantes haitianos y 209,912 fueron catalogados como personas de ascendencia haitiana. El número exacto de personas indocumentadas no ha quedado muy claro.

Las personas nacidas en territorio dominicano de ascendencia haitiana sin documentos de ciudadanía o de identidad confrontaron obstáculos al tratar de viajar tanto dentro como fuera del país. Además, los indocumentados no pueden obtener una tarjeta nacional de identificación (cédulas), o tarjetas de votación. Las personas que no tienen una cédula o acta de nacimiento tuvieron acceso limitado a la actividad electoral, a empleos dentro del sector formal, a la educación pública, al registro de matrimonios y nacimientos, a los servicios financieros formales, como bancos y préstamos, acceso a los tribunales y procedimientos judiciales, y a limitaciones en la obtención de tierras o propiedades.

En noviembre de 2013 el Presidente Medina decretó una amnistía, conocida como el Plan de Regularización de Extranjeros. El plan preveía un "camino especial a la naturalización" que beneficiaría a los extranjeros que entraron en el país de forma irregular; a los extranjeros que entraron legalmente pero sobrepasaron o violaron las condiciones de su estadía; y los menores inscritos en el registro civil que nacieron en el país de madres no residentes. El Presidente Medina también declaró un alto en las deportaciones durante el período de ejecución del Plan. En agosto, el Plan de Regularización concedió el estatus de residencia temporal a aproximadamente 240,000 migrantes irregulares (98 por ciento) de Haití. Una ONG estimó que unos 280,000 inmigrantes haitianos no solicitaron la regularización quedando sujetos a la deportación. El 14 de agosto, el Gobierno reanudó las deportaciones, reportando un total de aproximadamente 7,400 deportaciones entre agosto y octubre. De los deportados, el 99 por ciento eran inmigrantes haitianos.

Entre julio y octubre, funcionarios de la ONU llevaron a cabo más de 15 misiones a los cuatro cruces fronterizos más importantes del país y a siete centros de acogida para observar el proceso de deportación que llevaban a cabo las autoridades. También acompañaron a las autoridades de migración durante los procedimientos de interceptación que se llevaban a cabo en diferentes provincias. Los funcionarios de la ONU informaron que observaron procedimientos ordenados, legales, e individualizados, conforme con las normas internacionales de derechos humanos. El Gobierno manejaba cinco centros de detención de inmigrantes. De éstos, sólo uno existía en el 2014.

A partir de octubre, el Gobierno informó que se emitieron 750 tarjetas de residencia permanente y actas de nacimiento a los 8,755 solicitantes bajo la Ley 169-14. De éstos, 6,262 casos fueron aprobados y en proceso de emisión de documentos. El Gobierno indicó que iba a encontrar una solución al tema de la ciudadanía, en relación con la Ley 169-14, para aquellas personas que cumplieran con los requisitos pero que no presentaron sus solicitudes durante el período designado.

Sección 3. La libertad de participar en el proceso político

La ley les otorga a los ciudadanos la posibilidad de elegir su gobierno por medio de elecciones periódicas libres y justas, y basadas en el sufragio casi universal y equitativo, y los ciudadanos ejercieron este derecho. Miembros de la policía en servicio activo y el personal militar no pueden votar ni participar en la actividad política partidista.

Las elecciones y la participación política

Elecciones recientes: En el 2012 el candidato del PLD, Danilo Medina, ganó la presidencia en unas elecciones que fueron consideradas generalmente libres y ordenadas, a pesar de algunas irregularidades. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) obtuvo el mayor nivel de votos de un solo partido, pero el PLD ganó el voto popular con el apoyo de los partidos de la coalición. La Organización de los Estados Americanos, que tenía una misión de observación electoral presente durante todo el proceso electoral, señaló varias deficiencias en el marco legal del proceso electoral, incluyendo el uso de los recursos públicos, la financiación de las campañas, y el acceso equitativo a los medios de comunicación. La misión de observación, y otros observadores independientes, recibieron quejas sobre el derecho al voto de los dominicanos de ascendencia haitiana. Debido a las políticas del registro civil restrictivas impuestas por la JCE, miles de dominicanos de ascendencia haitiana no pudieron obtener los documentos de ciudadanía requeridos para participar en las elecciones de 2012.

Los observadores presenciaron cuando seguidores de los partidos políticos compraban tarjetas de identidad y votos el día de las elecciones, y también reportaron el uso de propaganda electoral en los centros de votación.

Con miras a las elecciones presidenciales y legislativas previstas para mayo de 2016, el 13 de diciembre se celebraron las primarias para seleccionar a los candidatos del PLD. Estas se vieron afectadas por violentos y aislados disturbios que dejaron un saldo de varios muertos en varios colegios electorales en Santiago y Villa Mella, en el norte de Santo Domingo. También hubo varios informes de interferencia con, o robo, de las urnas.

Partidos políticos y participación política: El 12 de junio, la Asamblea Nacional revisó la Constitución para permitir que el Presidente pudiese optar

por un segundo mandato consecutivo. El 17 de junio, el Presidente Medina anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de mayo de 2016. Un pacto entre rivales tradicionales, el PLD y el PRD, aseguró la aprobación de la reforma constitucional. El 13 de diciembre, el opositor Partido Revolucionario Moderno, bajo el liderazgo del candidato presidencial Luis Abinader, y el Partido Reformista Social Cristiano, anunciaron la creación de una alianza entre los dos partidos.

La participación de las mujeres y minorías: Por ley, los partidos deben reservar el 33 por ciento de las posiciones en sus listas de candidatos para la Cámara de Diputados y para los Ayuntamientos para las mujeres. Las mujeres, sin embargo, generalmente ocuparon menos del 25 por ciento de los escaños en el Congreso y de las Altas Cortes. Cada parte presenta sus listas, y las candidatas con frecuencia aparecían en la parte inferior de la lista lo que obstaculizaba sus posibilidades de lograr escaños en el Senado o en la Cámara de Diputados.

Sección 4. La corrupción y la falta de transparencia en el Gobierno

La ley establece sanciones penales por la corrupción oficial. Sin embargo, el Gobierno no implementó la ley de manera efectiva, y los funcionarios con frecuencia se involucraron en prácticas corruptas con impunidad. El Procurador General investigó a funcionarios presuntamente corruptos, pero la corrupción del Gobierno siguió siendo un problema grave y una queja importante dentro de la ciudadanía. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental.

El 23 de octubre, HOY, un diario de amplia circulación, publicó un artículo de primera plana sobre 250 casos de corrupción que habían sido presentados por los fiscales ante los Tribunales en los cinco años anteriores y el fracaso de los Tribunales de dictar sentencias en estos casos.

El Ministerio Público, dirigido por el Procurador General, fue el responsable de investigar y procesar los casos de corrupción a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). La Cámara de Cuentas admitió la responsabilidad del Gobierno a través de auditorías e investigaciones, lo que constituyó la base de muchos casos de

corrupción manejados por la PEPCA. La PEPCA, la Cámara de Cuentas, y el Contralor General funcionan de manera independiente y parecían estar libres de la influencia política, aunque hubo pocos procesos exitosos que involucraban a funcionarios de alto perfil involucrados en casos de corrupción. Mientras que las agencias gubernamentales se quejaban de la falta de recursos, las ONGs creíbles observaron que el mayor obstáculo para realizar una investigación eficaz era la falta de voluntad política para aplicar la ley y perseguir, en particular, a políticos de alto nivel.

Corrupción: Las organizaciones de la sociedad civil criticaron la práctica generalizada de la adjudicación de cargos gubernamentales como parte del sistema de clientelismo político y alegaron que muchos funcionarios públicos, a los que se conocen como "botellas", no tenían que trabajar para recibir un salario. Los municipios pequeños reportaron tener nóminas de 200, 350 o 600 empleados, cuando los edificios municipales no podrían alojar ni siquiera una décima parte de este número de empleados.

En muchas ocasiones, los agentes de la policía intentaron sobornar a personas que habían sido multadas o arrestadas. Muchas personas reportaron que la policía le había robado sus pertenencias. La policía supuestamente detenía a choferes, incluyendo a turistas extranjeros, pidiéndoles dinero a cambio de cancelar la multa. Los observadores locales de los derechos humanos informaron que los oficiales de migración y agentes de la policía detuvieron a trabajadores de la construcción en situación irregular, y a otros jornaleros de ascendencia haitiana y los extorsionaron, pidiéndole dinero. Las ONGs reportaron sobre casos de corrupción entre los oficiales militares y funcionarios de migración ubicados en los puestos fronterizos y en los puntos de chequeo.

Los oficiales de prisiones aceptaron dinero a cambio de emitir recomendaciones para que un prisionero saliera en libertad bajo fianza, o fuese liberado por razones de salud. Hubo denuncias creíbles de que los presos pagaron sobornos para obtener la libertad condicional.

El uso de sanciones no judiciales continuó. Estas medidas incluían el despido o traslado de personal militar, de oficiales de la policía, jueces y otros funcionarios de menor rango que participaron en estas prácticas de soborno y

otros comportamientos corruptos. Una actitud generalizada de tolerancia hacia algunas formas de la corrupción complicó los esfuerzos anticorrupción.

El 21 de octubre, el Tribunal Supremo votó por no acusar al Senador Félix Bautista y seis coacusados por cargos de malversación de RD\$4.5 mil millones (US\$100 millones), cuando Bautista dirigía la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

El Procurador General Francisco Domínguez Brito respondió de inmediato, calificándolo como un golpe en la lucha contra la corrupción, y afirmó que el Alto Tribunal "no merece la más mínima credibilidad".

El 16 de noviembre, el Consejo de la Magistratura suspendió cinco jueces por acusaciones de corrupción. Dos de los cinco fueron condenados a prisión preventiva en espera de juicio.

Divulgación financiera: La ley requiere que el Presidente, el Vicepresidente, y los miembros del Congreso, algunos jefes de agencias, y otros funcionarios, incluyendo los colectores de impuestos y de aduanas, declaren su propiedad personal dentro de un periodo de 30 días después de haber sido contratado, elegido o reelegido. Lo mismo debe hacer cuando concluyen sus responsabilidades. La Constitución también requiere que los funcionarios públicos declaren la procedencia de sus bienes. La nueva ley también movió la responsabilidad de recibir y revisar las declaraciones del Ministerio Público a la Cámara de Cuentas de recibir y revisar estas declaraciones. En agosto, la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte, le entregó al Procurador General una lista de 1,222 funcionarios que no habían presentado sus estados financieros y, por ende, deben enfrentar cargos criminales.

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental trabajó con un fuerte mandato político, pero obtuvo resultados mínimos.

Durante el año, la Cámara de Cuentas presentó cinco informes de auditoría a la PEPCA donde se encontraron indicios de malversación de fondos públicos y la falta de procedimientos adecuados. Estos informes correspondían al período correspondiente al 2009 y 2012, e implicaron tanto a las autoridades municipales como a representantes del Gobierno Central. Algunos de los implicados fueron acusados y juzgados, mientras que otros seguían bajo

investigación. No se tomaron acciones sobre casos reportados en años anteriores.

Acceso a la Información Pública: La Constitución establece el acceso público a la información gubernamental. La ley establece límites a la disponibilidad de dicha información únicamente bajo determinadas circunstancias como, por ejemplo, para proteger la seguridad nacional. Las autoridades están obligadas a revelar o responder a las solicitudes de acceso dentro de los 15 días de trabajo, y el procesamiento de las solicitudes es gratis o se cobra una tarifa razonable. La ley prevé penas de hasta dos años de prisión y una prohibición de cinco años de ocupar cargos de responsabilidad pública para los funcionarios que obstruyan el acceso a la información pública. Las respuestas a las solicitudes eran a menudo oportunas, pero incompletas, y el Gobierno con frecuencia rechazaba las solicitudes de seguimiento. Aunque gran parte de la información estaba disponible en línea, a menudo eran inexactas o incoherentes con otros informes gubernamentales. Hubo poca consistencia al determinar cuál era información pública, y cuál no, debido a la ausencia de una agencia de supervisión. Bajo la Iniciativa Participativa Anticorrupción, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales llevaron a cabo actividades y entrenamientos para promover el conocimiento público y la aplicación oficial efectiva de la ley.

Sección 5. Actitud del Gobierno respecto a la investigación internacional y no-gubernamental sobre alegadas violaciones de los derechos humanos

Una serie de organizaciones nacionales e internacionales trabajaron, generalmente, sin restricción gubernamental, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Mientras que los funcionarios a menudo cooperaron y fueron receptivos, los grupos de derechos humanos que abogan por los derechos de los haitianos y de las personas de ascendencia haitiana fueron una excepción y tuvieron que enfrentar acoso ocasional de parte del Gobierno.

Organismos gubernamentales de los derechos humanos: La Constitución establece la figura del defensor de los derechos humanos y, en 2013, el Senado designó a Zoila Martínez, ex Fiscal de Santo Domingo, por un periodo

de seis años. Las funciones del Defensor del Pueblo, como se indica en la Constitución, están dirigidas a salvaguardar los derechos humanos fundamentales de las personas y proteger los intereses colectivos establecidos en la Constitución y la ley. En octubre, Martínez informó que su oficina había recibido un total de 244 casos y que 90 se pudieron resolver.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

A pesar de que la Constitución o la ley prohíben la discriminación basada en la raza, el género, la discapacidad, el idioma y el estatus social, estos tipos de discriminación ocurren. El Gobierno rara vez ha reconocido que la discriminación ocurre o hecho esfuerzos para manejar el problema.

La mujer

Violación y violencia doméstica: La ley penaliza la violencia contra las mujeres, y el Estado puede penalizar la violación, el incesto, la agresión sexual y otras formas de violencia doméstica. Las sanciones por la condena de estos crímenes van desde uno a 30 años de prisión, y multas de RD\$700 a RD\$245,000 (US\$15, US\$5,400). Las sentencias por condena de violación, incluida la violación conyugal, oscilan entre los 10 a 15 años de prisión y conllevan multas de RD\$100,000 a RD\$200,000 (US\$2,210 a US\$4,420). En los casos de violación donde está involucrada una persona vulnerable, o un hijo, o que ocurre en otras circunstancias graves, la condena puede ser de 10 a 20 años de prisión.

La violación fue un problema grave y generalizado. Los sobrevivientes de violación a menudo no denuncian el delito por miedo al estigma social, el miedo a la venganza, y la percepción de que los sistemas policial y judicial no proporcionarían una reparación. El Estado puede procesar a un sospechoso de violación, incluida la violación conyugal, aunque la víctima no presente cargos. Generalmente, la policía anima a las víctimas de violación a solicitar la ayuda de la Unidad Especializada de Género de Violencia de la Policía Nacional, de la Procuraduría General, de los defensores públicos, o de las ONG.

A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno para mejorar la situación, la violencia contra la mujer se generalizó. La prensa publicó con regularidad

artículos sobre la violencia doméstica y los casos de feminicidio. Según las Naciones Unidas, el 30 por ciento de las mujeres en el país experimentó algún tipo de violencia a manos de su pareja o ex pareja. El Procurador General informó que, al mes de julio, las autoridades a nivel nacional recibieron más de 37,300 denuncias de violencia de género. El Procurador General informó que al mes de junio se produjeron 3,651 denuncias de delitos sexuales.

Diversos sectores afirmaron que el número de casos de violencia contra las mujeres superaba la capacidad del Procurador General para hacer frente a la situación. De acuerdo con la Oficina del Procurador General, durante los tres primeros trimestres del año, 112 mujeres fueron asesinadas. La Procuraduría General de la República reportó 57 casos de feminicidios por violencia doméstica al mes de agosto. De acuerdo con ONU Mujeres, la organización de la ONU dedicada a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres, más del 80 por ciento de las sobrevivientes de la violencia nunca presentó una denuncia ante el Procurador General. Sin embargo, se procesaron varios casos que resultaron exitosos.

La Oficina del Procurador General supervisa la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, entidad que cuenta con 17 oficinas satélites en las 32 provincias del país. En estas oficinas, los sobrevivientes de violencia pueden presentar demandas penales, obtener asesoría jurídica gratuita, y recibir atención psicológica y médica. La policía recibió instrucciones de enviar los casos de violencia y de asalto sexual doméstico a estas oficinas. Cada oficina cuenta con psicólogos profesionales dentro de su personal para aconsejar a las víctimas de violencia, y para evaluar la amenaza de peligro inminente asociado con una queja. Estas oficinas tienen autoridad para emitir una orden de restricción temporal inmediatamente de recibir una queja, y de servir como mensajeros para evitar que haya contacto entre la víctima y el abusador.

La Oficina del Procurador General dio un paso adicional para hacer frente al problema, instruyendo a sus funcionarios a no conciliar los casos de violencia contra la mujer y continuar con los procesos judiciales, incluso en aquellos casos donde las víctimas retiraron los cargos. Los fiscales fueron instruidos a proporcionar asistencia y protección a las víctimas de violencia, refiriéndolos

a las instituciones correspondientes para el asesoramiento legal, médico y psicológico. La Oficina del Procurador General también dio instrucciones a sus funcionarios a que las investigaciones y la presentación de los cargos deben haber concluido dentro de un periodo de 35 días, a menos que el caso fuese considerado complejo.

La Oficina de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, dirigida por la Coronela Teresa Martínez, estaba vinculada a las líneas de llamadas de emergencia para facilitar un servicio de respuesta rápida. Las líneas de llamada de emergencia estaban vinculadas con el sistema de respuesta de emergencia 911. Sin embargo, el sistema sólo funcionaba en Santo Domingo y zonas aledañas. La Oficina de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar contaba con un oficial de la policía debidamente entrenado en seis de las 17 oficinas satélite de prevención de la violencia y oficinas de atención. En los casos de violencia, los agentes estaban autorizados a entrar en el domicilio de la víctima sin una orden judicial para proporcionar la protección de las víctimas.

El Ministerio de la Mujer, institución que contaba con escasos recursos, llevó a cabo importantes campañas promocionales promoviendo la igualdad y la prevención de la violencia contra la mujer mediante la ejecución de programas de educación y sensibilización, y coordinó capacitación para otros ministerios y oficinas.

El Gobierno y varias ONGs llevaron a cabo programas de difusión y formación sobre la violencia doméstica y los derechos legales. El Ministerio de la Mujer manejaba dos refugios para sobrevivientes de la violencia doméstica en lugares no revelados, donde las personas abusadas podían hacer denuncias a la policía y recibir asesoramiento. Los refugios les ofrecían a las mujeres con asistencia a corto y medio plazo, hasta tres meses, para escapar de situaciones violentas. El Ministerio tenía presencia en 31 oficinas provinciales y 21 oficinas municipales, donde les ofrecía a las víctimas asistencia jurídica y psiquiátrica gratuita. El Ministerio también manejaba dos programas para rehabilitar a las personas condenadas por violencia doméstica o violencia de género.

Las ONGs declararon que aunque las leyes eran correctas, la respuesta de la policía no era eficaz en la prevención de la violencia de género. El sistema carecía de un enfoque integrado de atención a las víctimas, y el sistema judicial carecía de recursos para procesar con éxito a los autores, y el número de refugios para mujeres era insuficiente para cubrir las necesidades de las víctimas.

El acoso sexual: El acoso sexual en el lugar de trabajo es un delito menor y su condena conlleva una pena de un año de prisión y una multa equivalente a la suma de tres a seis meses de salario. Los líderes sindicales informaron, sin embargo, que la ley no se aplica y que el acoso sexual continuaba siendo un problema (ver sección 7.d.).

Los derechos reproductivos: Las parejas y los individuos tienen el derecho de decidir el número, el espaciamiento y el intervalo entre sus hijos, gestionar su salud reproductiva, tener los medios para hacerlo libres de discriminación, coerción y violencia. Se proporcionaron anticonceptivos sin costo alguno. Muchas mujeres de bajos ingresos, sin embargo, los utilizaron de manera inconsistente debido a la irregularidad en su suministro por parte de las instituciones públicas. Se mantenían los prejuicios sociales y las prohibiciones religiosas sobre el uso de métodos modernos de planificación familiar. La Encuesta Demográfica y de Salud 2013 (EDS) indicó que el 69 por ciento de las niñas y mujeres, entre los 15 a 49 años, utilizaba un método anticonceptivo moderno.

En el 2013 la Organización Mundial de la Salud reportó una tasa de mortalidad materna de 200 por cada 100,000 nacimientos. A pesar de que el país logró éxitos en la promoción de los partos en hospitales, un estudio universitario citó diversos problemas, entre ellos: la falta de supervisión en el cumplimiento de las normas, los protocolos, y la calidad de la atención; una generalizada falta de rendición de cuentas, y una cultura insuficiente de la seguridad del paciente; referencias inadecuadas y contra-referencias; los residentes sustituyendo a los médicos sin una supervisión adecuada; y una actitud deshumanizada fomentada por la falta de rendición de cuentas de parte de los profesionales de la salud en relación con las personas de escasos recursos que utilizan los servicios de salud pública.

Una alta tasa de embarazos entre las adolescentes sigue siendo una preocupación. En el 2014 el Banco Mundial reveló una tasa de natalidad entre las adolescentes de un uno por ciento y, en el 2013, el Fondo de Población de las Naciones Unidas estimó que el 22 por ciento de las adolescentes había estado embarazada, y que el 19 por ciento de las muertes maternas ocurrieron entre las adolescentes. Otros factores importantes que contribuyeron a las muertes maternas y neonatales fueron la mala calidad de la atención, y la falta de acceso a los servicios de atención de la salud, así como las complicaciones durante el embarazo y el parto. La mayoría de las niñas y las mujeres tuvieron acceso a algún tipo de atención posnatal, a pesar de que la falta de atención posnatal fue mayor entre jóvenes y mujeres con bajos niveles de educación, y aquellas en los quintiles económicos más bajos. El acceso a los servicios de diagnóstico y al tratamiento de infecciones de transmisión sexual se vio limitado debido a problemas técnicos, financieros y gerenciales, afectando tanto a los hombres como a las mujeres.

Discriminación: A pesar de que la ley les proporciona a las mujeres y a los hombres los mismos derechos legales, las mujeres no gozan de la condición económica o social, o las oportunidades que disfrutaban los hombres. Los hombres ocupaban aproximadamente el 70 por ciento de los puestos de liderazgo en todos los sectores. Sólo el 11 por ciento de las empresas contaban con mujeres ejecutivas. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en promedio las mujeres recibieron un 16 por ciento menos en salarios que los hombres en trabajos similares y que requieren las mismas habilidades. En el 2013, la tasa media de desempleo entre los hombres fue del 9.9 por ciento de la población activa, mientras que entre las mujeres fue del 16 por ciento. Según los informes, algunos empleadores les exigieron pruebas de embarazo a las mujeres antes de contratarlas, como parte del examen médico requerido. A pesar de que es ilegal discriminar en base a este tipo de pruebas, los líderes de las ONGs informaron que con frecuencia los empleadores no contratan a las mujeres embarazadas y, en ocasiones, cancelaron a las trabajadoras que quedaban embarazadas. No habían programas gubernamentales eficaces para combatir la discriminación económica contra la mujer (véase la sección 7.d.).

Niños y niñas

Registro de nacimiento: La ciudadanía se adquiere por nacimiento en el país, excepto en el caso de los hijos de diplomáticos que están "en tránsito", o para aquellos padres que están ilegalmente en el país (ver sección 2.d.). Un niño nacido en el extranjero a una madre o padre dominicano también puede adquirir la ciudadanía. Un niño que no ha sido inscrito al nacer es indocumentado hasta que se le haga una declaración tardía, y hubo limitaciones en cuanto a las declaraciones tardías. De acuerdo con el EDS 2013, el 16 por ciento de los niños y niñas de uno a cuatro años, el 10 por ciento de los niños y niñas entre las edades de cuatro a nueve, y el 5 por ciento de los niños y niñas entre las edades de 10 a 14 años no han sido inscritos.

Educación: La Constitución garantiza la educación pública, gratuita y obligatoria hasta los 18 años. Esta disposición no siempre se sigue, y debido a la falta de documentación y a la discriminación a muchos niños y niñas de origen haitiano se le negó el acceso a la enseñanza primaria. Una vez que los niños y niñas llegan a la escuela secundaria, se requiere documentación legal para inscribirse en la secundaria, lo que desalienta a algunos niños y niñas de asistir o terminar la escuela. Los niños que carecían de documentación también se limitaron a no asistir a la escuela secundaria (después del octavo grado), y confrontaron problemas para acceder a otros servicios públicos.

Abuso Infantil: El abuso de niños y niñas, incluyendo el abuso físico, sexual y psicológico es un problema grave. En mayo, la Oficina Nacional de Estadísticas publicó una encuesta de salud que reveló que el 62 por ciento de los niños y niñas entre las edades de uno y 14 años sufrieron algún tipo de abuso, incluyendo el abuso psicológico (54 por ciento) y el abuso físico (39 por ciento).

La Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General mantiene una línea directa donde las personas podían llamar para reportar casos de abuso infantil. Se presentaron cargos en pocos casos debido el temor de la familia a la vergüenza, por la falta de recursos económicos, o por la falta de conocimiento con respecto a la asistencia legal. La Oficina del Fiscal del Distrito Nacional informó que en la mayoría de los casos de abuso, el acusado era una persona cercana al niño o a la niña como, por ejemplo, un miembro de la familia o un amigo cercano de la familia. La Oficina del Procurador General

informó que hasta el mes de julio recibió 939 quejas de violación de menores, y 150 de incesto. La ley contempla la separación de un niño o una niña maltratado a un entorno de protección.

La ley contiene disposiciones relativas al abuso infantil, incluyendo el maltrato físico y emocional, la explotación sexual, y el trabajo infantil. La ley establece penas de dos a cinco años de prisión y multas de tres a cinco veces el salario mínimo mensual para las personas condenadas por abuso de un menor. La pena se duplicará si el abuso está relacionado con la trata. La Dirección Nacional de Atención a Víctimas, una oficina gubernamental, coordinó los esfuerzos de las entidades oficiales y de las organizaciones no gubernamentales para ayudar a los niños y niñas que fueron víctimas de la violencia y el abuso.

El matrimonio precoz y forzado: La edad mínima legal para contraer matrimonio con el consentimiento de los padres es de 16 años para los varones y 15 para las niñas. De acuerdo con los últimos datos disponibles de la ONU, aproximadamente el 41 por ciento de las mujeres entre los 20 a 24 años se casaron antes de cumplir los 18 años, y el 12 por ciento estaban casadas antes de los 15 años, mientras que sólo el 9 por ciento de los varones estaban casados antes de los 18 años. El Gobierno no llevó a cabo, que se sepa, algún tipo de programas de prevención o de mitigación. Las niñas a menudo se casaron con hombres mayores. El matrimonio infantil fue más frecuente entre las niñas sin educación, pobres, y residentes en zonas rurales. Más de la mitad de las mujeres pobres entró en su primer matrimonio o unión a los 17 años, en comparación con los 21 años para las mujeres con mejor situación económica.

La explotación sexual de los niños: La ley define el estupro como mantener relaciones sexuales con cualquier persona menor de los 18 años de edad. Las sanciones por una condena de violación de menores son de 10 a 20 años de prisión, y multas de RD\$100,000 a RD\$200,000 (US\$2,210 a US\$4,420). La ley también contiene disposiciones específicas que prohíben la pornografía infantil y la prostitución infantil, con sanciones que oscilan entre los 20 a 30 años de prisión y multas de RD\$100,000 a RD\$200,000 pesos (US\$2,210 a US\$4,420).

La prensa a menudo reportó sobre los casos de pedofilia. La explotación sexual comercial de los niños y niñas, en general, se produjo en lugares turísticos y en los principales centros urbanos. El Gobierno llevó a cabo varios programas para combatir la explotación sexual de menores, incluyendo la publicación de avisos en los aeropuertos y en programas transmitidos en lugares turísticos populares. El Ministerio de Trabajo continuó con un programa para combatir la explotación en los destinos turísticos populares como Boca Chica, Sosúa, y Las Terrenas. Estos programas ofrecían apoyo psicológico y asistencia médica, apoyaban el retorno de los niños y niñas a las aulas, y reunificaron a los menores con sus familias y comunidades, siempre que fuese posible. Los programas también proporcionaban asistencia jurídica a los niños víctimas y a sus familias para arrestar y condenar a los explotadores.

Los niños y niñas desplazados: Una gran población de niños, principalmente haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana, vivían en las calles (ver sección 2.d.). La trata de niños haitianos fue un problema (véase el *Informe Sobre Trata de Personas* del Departamento de Estado en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/).

Secuestro internacional de menores: El país es parte de la Convención de La Haya de 1980 sobre el secuestro internacional de menores. Para más información, ver el informe del Departamento de Estado sobre su cumplimiento en travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html e información específico sobre el país en travel.state.gov/content/childabduction/en/country/dominicanrepublic.html.

Anti-semitismo

La comunidad judía está conformada por aproximadamente 350 personas. No hubo informes de actos anti-semitas.

Trata de personas

Ver el *Informe Sobre Trata de Personas* del Departamento de Estado en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

Personas con discapacidades

Aunque la ley prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales, estos individuos sufren discriminación en cuanto a empleo, educación, y en la obtención de los servicios de salud y transporte. La ley establece el acceso físico de las personas con discapacidad a todos los nuevos edificios públicos y privados, y acceso a los servicios básicos. También especifica que cada Ministerio debe colaborar con el Consejo Nacional de Discapacidad para poner en práctica estas disposiciones. Las autoridades trabajaron para hacer cumplir estas disposiciones, pero una brecha en la implementación persistió. Son muy pocos los edificios públicos que son totalmente accesibles.

Durante el año, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones completó la colocación de rampas en las intersecciones a lo largo de la avenida Máximo Gómez, una vía principal. Además, el Gobierno dispuso la instalación de rampas en todas las renovaciones realizadas a edificios en Santo Domingo.

La Asociación Dominicana de Rehabilitación recibió el apoyo del Ministerio de Salud Pública y de la Oficina de la Presidencia para ofrecer servicios de rehabilitación a favor de personas con discapacidades físicas y de aprendizaje, así como para establecer escuelas para menores con discapacidades físicas y mentales. La falta de transporte público accesible para las personas con discapacidades sigue siendo un importante obstáculo para la movilidad de las personas con discapacidad.

La ley establece que el Gobierno debe asegurar que las personas con discapacidades tengan acceso al mercado laboral, así como a las actividades culturales, recreativas y religiosas, pero esta disposición no se aplica de manera constante (véase la sección 7.d.). Un estudio de la UNESCO de 2012 informó que el 70 por ciento de los menores con discapacidades no asistían a la escuela. El Centro de Atención Integral, en Santo Domingo, ayudó a más de 200 niños durante el año, convirtiéndose en la única institución que le ofrece atención a niños con discapacidades de desarrollo.

El Consejo Nacional de Discapacidad informó que los prejuicios contra las personas con discapacidades se han generalizado en todo el país, así como el débil empoderamiento familiar y la falta de políticas de inclusión tanto en las

instituciones del sector público como del privado. Muy pocos recursos se canalizaron a favor de las personas con discapacidad mental.

Minorías nacionales/étnicas/raciales

Hubo evidencia significativa de los prejuicios raciales y de la discriminación contra las personas de tez oscura, pero el Gobierno negó que tales prejuicios o discriminación existían y, en consecuencia, hicieron poco para abordar el problema.

Permanece el prejuicio contra los haitianos, contra los haitianos desfavorecidos, y contra los dominicanos de ascendencia haitiana, así como otros extranjeros de tez oscura. Los funcionarios les negaron servicios básicos de salud y documentación a las personas de ascendencia haitiana.

Las ONGs locales informaron sobre incidentes donde las personas de piel más oscura se les negaron acceso o servicios en los bancos, en restaurantes y tiendas, en la entrada a discotecas, en escuelas privadas y en el registro de nacimientos en los hospitales. Las oportunidades económicas también se les negaron a las personas de piel más oscura, basado en el requisito cultural de tener una "buena presencia" (ver sección 7.d.).

Los haitianos continuaron emigrando al país en busca de oportunidades económicas y de ayuda. La DGM reportó unas 7,400 deportaciones entre agosto y octubre, de los cuales el 99 por ciento de los deportados eran ciudadanos haitianos.

Algunos inmigrantes haitianos, y otros, vivían en los barrios pobres o en los bateyes. Al igual que en muchas zonas pobres en otras partes del país, se trataba de ambientes hostiles con poca o ninguna electricidad, agua potable, instalaciones sanitarias, o escuelas apropiadas. En muchos bateyes, la asistencia médica era rudimentaria o prácticamente inexistente, y el agua limpia no siempre estaba disponible. Muchos residentes de los bateyes, que carecen de documentación, entendían que no tenían más remedio que permanecer en sus comunidades, donde se sentían relativamente seguros de no ser deportados y de no sufrir el acoso que existía en otras partes del país.

En febrero, un limpiabotas haitiano, Jean Claude Henry, fue encontrado ahorcado en un parque del centro de Santiago, la segunda ciudad más grande del país. El mismo día, una bandera de Haití fue quemada por un grupo en otra parte de la ciudad.

En respuesta a la muerte de un joven dominicano, el 6 de abril, aproximadamente 40 dominicanos armados con piedras, palos, bates de béisbol y machetes expulsaron entre 30-50 haitianos de sus hogares en Moca, un municipio ubicado en el norte, cerca de Santiago. El fiscal de Moca arrestó a cinco personas involucradas en el ataque. Un juez en La Vega condenó y encarceló a dos haitianos por el asesinato del dominicano. Aunque el Gobierno condenó la práctica del vigilantismo, las ONGs expresaron su preocupación de que la falta de transparencia y la inacción de parte de las autoridades locales fomentaría entre elementos criminales o ultranacionalistas a creer que podían cometer actos violentos contra los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana con impunidad.

Los actos de violencia, la discriminación, y otros abusos basados en la orientación sexual e identidad de género

El trato a las personas lesbianas, *gays*, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) varió de tolerancia ambivalente a una homofobia decidida. Existe una ley específica que protege a las personas contra la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género. La Constitución establece que el Estado promoverá el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, no define el matrimonio como exclusivamente entre un hombre y una mujer. La ley no le ofrece los mismos derechos a las parejas del mismo sexo que cohabitan que a las parejas heterosexuales que cohabitan. La ley prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en cuanto a las oportunidades de desarrollo de la juventud.

Las ONGs informaron sobre la discriminación generalizada contra las personas LGBTI, en particular las personas transexuales y lesbianas, en áreas tales como la salud, educación, justicia, y el empleo (véase el apartado 7.d.). Las personas LGBTI enfrentan a menudo la intimidación y el acoso. Aunque

la sociedad civil realizó varios talleres para sensibilizar y cambiar las percepciones negativas de la población, algunos estudios publicados por *Americas Barometer* y *Latinobarómetro* llegaron a la conclusión de que los puntos de vista de la sociedad hacia la comunidad LGBTI siguieron siendo muy conservadores. Los grupos religiosos se manifestaron en contra de la comunidad LGTBI. A la pregunta de si se deben adoptar medidas legales para proteger a las personas LGBTI de la discriminación, el 54 por ciento de los encuestados de los estudios se opusieron a tales medidas. Una encuesta de Gallup de 2014 encontró que el 73 por ciento de los encuestados admitió la discriminación social contra la comunidad LGBTI. Los líderes católicos y evangélicos con frecuencia criticaron a los activistas LGBTI y a las organizaciones internacionales que promueven los derechos humanos LGBTI, a veces utilizando términos despectivos e insultos contra individuos o prominentes activistas LGBTI.

Entre diciembre de 2014 y agosto, el Observatorio de Derechos Humanos de Grupos Vulnerables recibió 21 informes de abusos policiales, incluyendo la detención arbitraria, la violencia policial y la extorsión contra los miembros de la comunidad LGBTI. Las ONGs informaron que las personas LGBTI eran reacios a presentar cargos oficiales o quejas por temor a represalias o humillación. En aquellas situaciones donde las personas LGBTI presentaron quejas, muchos optaron por retirar los cargos. La comunidad trans también reportó actos de discriminación y violencia.

En agosto, en la zona colonial de Santo Domingo, tres miembros de la Policía Turística utilizaron un “Taser” (aparato que emite una descarga eléctrica) y golpearon a un homosexual. Según el Observatorio de Derechos Humanos, él y su compañero fueron detenidos por darse un beso en la calle, así como por caminar por las calles agarrados de las manos, acciones que no están prohibidas por la ley. Mientras estuvieron detenidos en un cuartel de la policía, a los hombres se les negaron llamadas telefónicas y alimentos.

De acuerdo con informes fidedignos, las personas LGBTI fueron detenidas arbitrariamente y se les negó el acceso a puestos de trabajo, acceso a la salud, y de adquirir viviendas o alquilarlas. Las ONGs que trabajan con la comunidad LGBTI informaron que la discriminación y los ataques eran más

prevalentes fuera de Santo Domingo. Las ONGs informaron sobre varios casos de estudiantes LGBTI expulsados de la escuela por ninguna razón legítima. Los miembros de la comunidad LGBTI reportaron que los centros de salud público y privado les negaron la atención requerida a diversas personas.

En julio, el Tribunal de Monte Plata dictó una sentencia de cinco años de prisión a un menor condenado por la muerte por apuñalamiento, en septiembre de 2014, de un joven transgénero, Alexa, en un festival en Monte Plata.

El 15 de agosto, Oscar Pérez, Luis Manuel Estévez Ponciano, y José Rafael Miliano Rodríguez fueron condenados a 30 años de prisión por el asesinato – en el 2013 – del cubano-dominicano Claudio Nasco, el lector principal de un programa nocturno de noticias. Nasco era miembro de la comunidad gay en Santo Domingo.

En septiembre, asaltantes dispararon y mataron a Susi, un transexual, cerca del sector Friusa, en Bávaro. Aunque las autoridades afirmaron que el motivo del asesinato, y los sospechosos de la muerte eran desconocidos, el Observatorio de Derechos Humanos y otras ONGs LGBTI lo consideraron como un crimen motivado por el odio.

Aunque las autoridades les concedieron permisos a las personas LGBTI para realizar actividades en los espacios públicos, los permisos con frecuencia incluían condiciones especiales que impedían que las organizaciones LGBTI pudiesen realizar sus eventos. Las personas LGBTI con frecuencia se reunían de manera informal en espacios públicos, especialmente en el Parque Duarte de la zona colonial de Santo Domingo. Las reuniones formales generalmente necesitan la aprobación de la Junta de Vecinos, institución influenciada por la Iglesia Católica y sus puntos de vista conservadores sobre los temas LGBTI.

El 5 de julio, por quinto año consecutivo, la comunidad LGBTI llevó a cabo con éxito un desfile de orgullo gay y celebró un concierto de solidaridad. Del 26 de noviembre al 6 de diciembre la comunidad LGBTI celebró en Santo Domingo el *Out Fest*, el cuarto festival de cine internacional LGTBI celebrado en el país. El festival, que busca promover los derechos humanos y la

convivencia social, fue organizado por una red de voluntarios con el apoyo de otras organizaciones locales e internacionales.

El estigma social del VIH y el SIDA

En el EDS de 2013, el 50 por ciento de las mujeres y el 57 por ciento de los hombres reportaron tener actitudes discriminatorias contra las personas que viven con el VIH. Las personas con el VIH/ SIDA enfrentaron discriminación, especialmente en el lugar de trabajo.

Las personas con VIH/SIDA enfrentan con frecuencia discriminación en cuanto acceso a los servicios de salud y empleos (véase el apartado 7.d.). Las ONGs informaron que los trabajadores de salud discriminaron a los pacientes con VIH/SIDA. Esta discriminación impidió que las personas se pudieran realizar las pruebas del VIH/SIDA, y de recibir los servicios y tratamientos preventivos. Aunque la ley prohíbe el uso de la prueba del VIH para evaluar a un posible empleado, la organización *Human Rights Watch*, Amnistía Internacional y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informaron que en diversos centros de trabajo las pruebas del VIH eran obligatorias. En algunos casos a los trabajadores se les hizo la prueba sin su conocimiento o consentimiento. A los trabajadores con la enfermedad no los contrataron, y los que ya estaban empleados fueron despedidos o se les negó la atención médica adecuada.

En agosto, la Ministra de Trabajo, Maritza Hernández, lanzó una campaña para crear conciencia sobre la desigualdad y la discriminación en el trabajo. La campaña educativa les indicaba a las personas sobre su derecho a trabajar en el mercado laboral, independientemente de las discapacidades percibidas. La campaña incluyó talleres, charlas y visitas a lugares de trabajo para promover una cultura de igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo. También trató el tema de la inclusión y la permanencia, en un lugar de trabajo digno, de aquellas personas en condiciones vulnerables, incluyendo aquellas con el VIH/SIDA, de diferentes razas, sexo u orientación sexual.

El Consejo Presidencial del SIDA, conformado por miembros del sector público y privado, y por personas que son VIH/SIDA positivas, coordinaron las políticas a nivel nacional y cooperó con las ONGs locales con el objetivo

de reducir el impacto del VIH/SIDA en las poblaciones vulnerables y la sociedad. El Ministerio de Salud también financió a varias organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas, tales como el Centro de Orientación e Integración, la cual trabajó para combatir la discriminación y facilitar su integración en la sociedad.

Otro tipo de violencia o discriminación social

En varias ocasiones, los ciudadanos atacaron y a veces mataron a presuntos delincuentes utilizando técnicas de vigilantismo en represalia por la comisión de robos o atracos. Los observadores atribuyeron estos incidentes a un aumento de la delincuencia y la percepción de que las fuerzas de seguridad eran incapaces de detener o combatir la delincuencia.

Sección 7. Derechos de los trabajadores a. La libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva

La ley establece el derecho de los trabajadores, con excepción de los militares y de la policía, a asociarse y formar sindicatos independientes, realizar huelgas legales, y negociar de manera colectiva. Sin embargo, le impone varias restricciones a estos derechos. Por ejemplo, los derechos sindicales están restringidos por un requisito considerado excesivo por la OIT de que un sindicato debe representar el 50 por ciento más uno de los trabajadores de una empresa para poder llevar a cabo una negociación colectiva. Además, la ley establece que las huelgas no pueden ser convocadas hasta que no se cumplan los requisitos obligatorios de mediación.

Aunque la ley requiere que el Ministerio de Trabajo inscriba los sindicatos para que sean legales, se prevé el reconocimiento automático de un sindicato si el Ministerio no ha respondido a una solicitud dentro de un periodo de 30 días. La ley le permite a los sindicatos realizar sus actividades sin interferencia del Gobierno. A los trabajadores del sector público se les permite formar asociaciones que han sido inscritas en el Ministerio de Administración Pública. La ley requiere que el 40 por ciento de los empleados públicos estén de acuerdo en unirse a un sindicato, en una entidad gubernamental determinada, para que dicho sindicato se pueda conformar. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la ley se aplica a todos los trabajadores, incluyendo los

extranjeros, los que trabajan en el servicio doméstico, los trabajadores indocumentados, y los trabajadores de las zonas francas (ZF).

Para que una huelga se considere legal se deben cumplir ciertos requisitos, incluyendo el apoyo de la mayoría absoluta de todos los trabajadores de la empresa para poder realizar la huelga, llevar a cabo un esfuerzo previo para resolver el conflicto a través de la mediación, la notificación por escrito al Ministerio de Trabajo, y un período de espera de 10 días después de la notificación antes de proceder con la huelga. Los trabajadores del Gobierno y el personal de servicios públicos esenciales no están autorizados a participar en huelgas. La ley prohíbe la discriminación contra los sindicatos y prohíbe a los empleadores despedir a un empleado por participar en actividades sindicales, incluyendo el formar parte de un comité que trata de formar un sindicato.

El Gobierno, de manera inconsistente, intentó hacer cumplir las leyes relacionadas con la libertad de asociación y la negociación colectiva. Las sanciones establecidas por la ley sobre las prácticas laborales contrarias a la libertad de asociación oscilan entre siete y 12 salarios mínimos, y pueden aumentar en un 50 por ciento si el patrón repite la acción. Estas sanciones resultaron insuficientes para disuadir a los empleadores de violar los derechos de los trabajadores y rara vez fueron ejecutadas. Los inspectores de trabajo no investigaron de manera sistemática las denuncias hechas sobre las violaciones de la libertad sindical y de la negociación colectiva. Por ejemplo, los trabajadores del sector azucarero siguieron reportando que los inspectores de trabajo del sector azúcar no le preguntaron a los trabajadores o supervisores sobre la libertad de asociación de los trabajadores, el derecho a organizarse, la afiliación sindical o actividad, o la negociación colectiva, aunque los trabajadores habían informado por separado algunos casos donde los empleadores los habían amenazados con despedirlos o de sacarlos de sus viviendas si se reunían con sus compañeros de trabajo.

El proceso para resolver las disputas a través de los tribunales laborales era a menudo largo, y habían casos pendientes desde hacía varios años. Las ONGs y las federaciones de trabajadores informaron que las empresas se aprovecharon del lento e ineficaz sistema legal para la apelación de los casos, lo que dejaba

a los trabajadores sin protección de sus derechos laborales temporales. No se respetaron, de manera consistente, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Hubo informes de intimidación, amenazas y chantajes por parte de los empleadores para impedir la actividad sindical. Algunos sindicatos les exigían a sus miembros proporcionarles la documentación legal para participar en el sindicato, a pesar del hecho de que todos los trabajadores dentro del territorio están cubiertos por el Código de Trabajo, independientemente de su situación legal.

Las ONGs que trabajan con el tema laboral informaron que la mayoría de las compañías resistió aceptar las prácticas de negociación colectivas y pusieron en la lista negra a los sindicalistas, así como otras prácticas anti-sindicales. Por ejemplo, los líderes sindicales alegaron que una empresa le pagó a un juez RD\$700,000 (US\$15,400) para que emitiera una sentencia para que la compañía pudiese revocar la inmunidad del liderazgo sindical y despedirlos. Con frecuencia se les pidió a los trabajadores firmar documentos comprometiéndose a abstenerse de participar en actividades sindicales. Las empresas también crearon y apoyaron los sindicatos "amarillos", o sindicatos respaldados por las empresas para hacer frente a las uniones libres y democráticas. Las huelgas formales no eran comunes.

Las empresas utilizan contratos a corto plazo y subcontratan empleados, lo que hizo mucho más difícil la organización sindical y la negociación colectiva. Muy pocas empresas tenían pactos colectivos de trabajo, en parte porque las empresas creaban obstáculos para la formación de sindicatos y podían permitirse el lujo de pasar por los procesos judiciales largos que los sindicatos incipientes no podían pagar.

La Federación Dominicana de Trabajadores de Zonas Francas (FEDOTRAZONAS) informó que la administración de varias empresas, o sus subcontratistas, llevaron a cabo campañas antisindicales dentro de sus empresas, que incluyeron amenazas de despido de los miembros del sindicato, y participaron en actividades para posponer el logro de su afiliación sindical que les permitiera establecer los derechos de negociación dentro del marco del Código de Trabajo. El Ministerio de Trabajo intervino en algunos casos para ofrecer servicios de mediación.

FEDOTRAZONAS informó que los sindicatos eran activos en sólo 35 empresas de las aproximadamente 550 empresas de las zonas francas, y que sólo seis sindicatos tenían derechos para llevar a cabo negociaciones colectivas. Los sindicatos en las zonas francas informaron que sus miembros dudaron en hablar sobre la actividad sindical en el trabajo debido al temor de perder sus puestos de trabajo. Los sindicatos acusaron a algunas empresas de las zonas francas del despido de trabajadores que intentaron organizar sindicatos.

Las ONGs continuaron reportando que muchos trabajadores haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana que laboraban en las industrias de la construcción y agrícola, incluyendo el azúcar, no pudieron ejercer sus derechos por temor a ser despedidos o deportados. El Ministerio de Trabajo informó que durante el primer semestre de 2014 había 237,843 haitianos residiendo en el país, de los cuales 157,562 estaban trabajando en los sectores formal e informal de la economía. Varios sindicatos representaron a los haitianos que trabajaban en el sector formal. Sin embargo, estos sindicatos no eran influyentes. El Ministerio también indicó que los haitianos ganaban, en promedio, el 60 por ciento del salario que recibía un trabajador dominicano.

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. La ley establece condenas de trabajos por acusación de trabajos forzados de hasta 20 años de prisión, con multas. Dichas sanciones fueron lo suficientemente estrictas para evitar abusos.

El Gobierno informó que no recibió quejas sobre trabajos forzosos durante el año. No obstante, hubo informes creíbles de trabajo forzoso de adultos en las áreas de servicio, la construcción y los sectores agrícolas, así como informes de trabajos forzosos de niños y niñas en el servicio doméstico, en la venta callejera o como mendigos, y en los sectores agrícola y de la construcción. Por ejemplo, los trabajadores y los sindicatos reportaron casos donde los trabajadores tuvieron que trabajar horas extraordinarias de manera obligatoria, incurrir en el endeudamiento, engaños, falsas promesas sobre los términos de trabajo, y la retención y la falta de pago de los salarios en los sectores de la construcción y agrícola, incluido el sector azúcar. El Gobierno inició 338

procesos judiciales laborales por violaciones de las horas extraordinarias y los reglamentos sobre el descanso semanal entre enero y julio (ver también el capítulo 7.e.).

La falta de documentación y de un estatus legal en el país de los trabajadores haitianos los hizo más vulnerables al trabajo forzoso. Aunque los datos específicos sobre el problema fueron limitados, los nacionales haitianos habrían sido sometidos a trabajos forzosos en el sector servicios, la construcción y los sectores agrícolas. Muchos de los 240,000 inmigrantes irregulares, en su mayoría haitianos que recibieron residencia legal temporal (un año o dos años) a través del Plan de Regularización de Extranjeros trabajaban en estos sectores. Además del Plan de Regularización, el Gobierno concedió la residencia permanente a los 2,724 trabajadores de la caña de azúcar ya jubilados y pensionados, quienes tuvieron la opción de hacerse ciudadanos naturalizados después de cuatro años.

También puede ver el *Informe sobre Trata de Personas* del Departamento de Estado en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima de empleo

La ley prohíbe el empleo de niños y niñas menores de 14, e impone restricciones sobre el empleo de niños y niñas menores de 16 años, limitando su tiempo de trabajo a seis horas por día. Para los menores de 18 años, la ley limita el trabajo nocturno y prohíbe el empleo en trabajos peligrosos, tales como lugares donde se utilicen sustancias peligrosas, maquinarias pesadas o peligrosas, y llevar cargas pesadas. Los menores también tienen prohibido la venta de alcohol, realizar ciertos trabajos en la industria hotelera, manipular cadáveres, y otras tareas dentro de la producción de caña de azúcar, tales como la siembra, el corte, transportar, y pesar la caña de azúcar, o manejar el bagazo.

Las empresas que contratan los menores de edad están sujetas a multas y sanciones legales.

El Ministerio de Trabajo, en coordinación con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), es el responsable de hacer cumplir las leyes sobre el trabajo infantil. La ley prevé sanciones para las violaciones

relacionadas con el trabajo infantil, incluyendo multas y penas carcelarias. Aunque generalmente el Ministerio y el CONANI aplicaron de manera efectiva las regulaciones en el sector formal, el trabajo infantil en el sector informal era un problema.

El plan del Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil para eliminar las peores formas de trabajo infantil fijó objetivos, identificó prioridades, y asignó responsabilidades para combatir el trabajo infantil explotador. Varios programas gubernamentales se centraron en la prevención del trabajo infantil en sectores agrícolas, tales como el café, tomate, y la producción de arroz; la venta callejera; el trabajo doméstico; y la explotación sexual comercial.

El Gobierno continuó con la ejecución de un proyecto, conjuntamente con la OIT, para sacar a 100,000 niños, niñas y adolescentes de la explotación laboral como parte de su *Hoja de Ruta para la Eliminación del Trabajo Infantil*. La hoja de ruta tiene como meta eliminar las peores formas de trabajo infantil en el país para finales de año, y todos los otros tipos de trabajo infantil para el año 2020. En junio, el Gobierno anunció una serie de iniciativas diseñadas para acabar con el trabajo infantil, incluyendo la introducción de un programa de entrenamiento diseñado por la OIT para ayudar a los empleadores del sector público y privado a eliminar el trabajo infantil.

Sin embargo el trabajo infantil sigue siendo un problema. Una encuesta de salud publicada en mayo por la Oficina Nacional de Estadísticas reveló que el 12.8 por ciento de los niños y niñas entre las edades de cinco y 17 años realiza algún tipo de trabajo infantil ilegal. Un funcionario del Gobierno señaló que las peores formas de trabajo infantil disminuyeron en un 6 por ciento en los 10 años anteriores. Por el contrario, una organización de la sociedad civil con sede en Santiago, Acción Callejera, dedicada a trabajar con niños de la calle, declaró que los números de niños trabajadores continuaron creciendo. La organización también señaló que aunque los funcionarios afirmaron que el Gobierno rescató a aproximadamente 100,000 niños vulnerables de las calles locales, este esfuerzo no impactó la ciudad de Santiago.

El trabajo infantil se produjo principalmente en la economía informal, en las pequeñas empresas, en los hogares y en el sector agrícola. En particular, hubo informes de niños que trabajaban en la producción de ajo, papas, café, caña de azúcar, tomate y arroz. Los niños, a menudo acompañados de sus padres, trabajaban en los campos agrícolas. Las ONGs también reportaron que muchos niños trabajaban en el sector servicios en diversos puestos de trabajo, incluyendo el servicio doméstico, como vendedores callejeros y mendigos, limpiabotas, limpiadores de ventanas y lavadores de automóviles. La explotación sexual comercial de los niños sigue siendo un problema, especialmente en los destinos turísticos populares y en las zonas urbanas (véase la sección 6, Niños y niñas).

Muchos niños y niñas que trabajaban en el servicio doméstico son víctimas del trabajo forzoso. Hubo informes creíbles de que las familias pobres de Haití acordaban con familias dominicanas la "adopción" de sus hijos. En algunos casos, los padres adoptivos al parecer no tratan a los niños como miembros de la familia, demandando que trabajen en las empresas familiares o en las casas en vez de que vayan a la escuela, lo que ha dado como resultado una especie de servidumbre para los niños, niñas y adolescentes.

Puede ver *Hallazgos sobre las peores formas del trabajo infantil* del Departamento de Trabajo en www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/.

d. Discriminación en materia de empleo o de ocupación

La ley prohíbe todas las formas de discriminación, exclusión o preferencia en el empleo basadas en el sexo, la edad, el idioma, la raza, el color, la nacionalidad, el origen social, la afiliación política o sindical, las creencias religiosas, y en contra de las personas con VIH / SIDA. El Gobierno no hizo cumplir, de manera efectiva, estas disposiciones. No existe una ley contra la discriminación en el empleo basada en la preferencia sexual.

La discriminación en el empleo y en la ocupación se produjo con respecto a las personas LGBTI, especialmente con las personas transgénero, contra las personas positivas con VIH/SIDA, contra los discapacitados, las personas de piel más oscura, y las mujeres (ver también el capítulo 6). Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés) expresó

su preocupación por el continuo acoso sexual en el lugar de trabajo e instó al Gobierno a tomar medidas específicas para hacer frente a los estereotipos sociales y culturales que contribuyen a la discriminación en el país. La discriminación de los trabajadores migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana se produjo en todos los sectores. Muchos migrantes irregulares haitianos no tienen acceso completo a las prestaciones, incluyendo la seguridad social y a los servicios de salud (ver también secciones 7.b y 7.e.).

En agosto, el Ministerio de Trabajo anunció una campaña contra la discriminación laboral titulada “Trabajemos todos por la igualdad”. El programa ofreció apoyo a los grupos vulnerables, incluyendo a las personas con discapacidades, a la mujer, a aquellas personas con una orientación sexual diferente, y a personas con VIH/SIDA.

e. Condiciones aceptables de trabajo

Se registraron 14 salarios mínimos diferentes, dependiendo de la industria. El salario mínimo para los trabajadores en las zonas francas fue RD\$8,310 pesos (US\$183) por mes. El salario mínimo para los trabajadores fuera de las zonas francas varió de RD\$7,843 (US\$ 173) a RD\$12,873 (US\$284) por mes. El salario mínimo para el sector público fue de RD\$5,884 pesos (US\$130) por mes. El salario mínimo diario para los trabajadores agrícolas fue de RD\$234 (US\$5.17), basado en un día de 10 horas, con la excepción de los trabajadores de los cañaverales, que recibieron RD\$146 pesos (US\$3.22), sobre la base de una jornada laboral de ocho horas. Las disposiciones sobre los salarios mínimos cubren a todos los trabajadores, incluyendo los migrantes. El Banco Central calcula que, debido a la inflación, el salario mínimo no había aumentado en términos reales desde 1979. El Consorcio de los Derechos del Trabajador y las centrales de trabajadores estimaron que el salario digno debía ser de US\$27,897 (US\$616) por mes.

En 2012, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo utilizó estadísticas de 2007 para calcular la línea de pobreza oficial en RD\$3,247 pesos (US\$72) al mes. El Ministerio indicó que el 43 por ciento de la población vivía en la pobreza. En febrero, la Fundación Juan Bosch, en conjunto con la Fundación Sol de Chile, dio a conocer un estudio que informó

que el 63 por ciento de los dominicanos que trabajan no recibió un ingreso que pudiese cubrir el presupuesto familiar mínimo, y sólo el 3.4 por ciento recibió un salario adecuado para proveer para una familia de cuatro. El informe indicó que el 80 por ciento de los trabajadores ganaban menos de RD\$20,000 pesos (US\$454) por mes.

En agosto, la Comisión Nacional de Salarios aprobó un aumento salarial del 15.5 por ciento para los trabajadores de la construcción. El Ministerio de Trabajo señaló que el aumento beneficiaría a todos los trabajadores de la construcción en todo el país. La Comisión Nacional de Salario aprobó el aumento después de escuchar los argumentos presentados por la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción, así como por representantes del sector privado de la construcción. No se anunció la fecha para la entrada en vigencia del incremento salarial.

El Ministerio de Trabajo, en un acuerdo tripartito con los sindicatos y el sector privado, aprobó un aumento del salario mínimo en el sector privado de un 14 por ciento en mayo. La última vez que se aumentó el salario mínimo fue en la década de 1990. Uno de los principales diarios realizó una encuesta al azar y encontró que, si bien la mayoría de los encuestados aprobó el aumento, la mayoría afirmó que el aumento no mejoraría su bienestar. Los sindicatos, que buscaban un aumento del 28 al 30 por ciento, informaron su descontento con el resultado de la negociación tripartita.

La ley establece una semana laboral estándar de 44 horas. Mientras que los trabajadores agrícolas están exentos de este límite, en ningún caso la jornada de trabajo debe exceder las 10 horas. La ley estipula que todos los trabajadores tienen derecho a 36 horas de descanso ininterrumpido por semana. Aunque la ley contempla las vacaciones anuales pagadas y el pago de horas extraordinarias, su aplicación fue inefectiva. La ley prohíbe el exceso de horas extraordinarias u obligatorias, y establece que los empleados puedan trabajar un máximo de 80 horas adicionales, durante un periodo de tres meses. El Código de Trabajo cubre a los trabajadores domésticos, pero no cubre la notificación, las prestaciones o el pago de bonos. Los trabajadores domésticos tienen derecho a vacaciones pagadas, por dos semanas, después de un año de trabajo continuo, así como un bono navideño equivalente a un mes de salario.

El Código de Trabajo también cubre a los trabajadores de las zonas francas, aunque no tienen derecho a bonos.

El Ministerio de Trabajo establece las normas de seguridad y salud en el sector laboral. Por ley, los empleadores están obligados a velar por la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Por ley, los empleados pueden retirarse de situaciones que ponen en peligro su salud o su seguridad sin poner en riesgo su empleo, pero en la práctica no podían hacerlo sin exponerse a represalias.

Tanto el Instituto de Seguridad Social como el Ministerio de Trabajo contaban con un pequeño cuerpo de inspectores encargados de hacer cumplir las normas. El Ministerio empleó 186 inspectores de trabajo y reportó 5,065 violaciones laborales desde enero hasta julio. El Ministerio informó que durante el año capacitó a los inspectores de trabajo sobre los protocolos de inspección y las mejores prácticas, y llevó a cabo campañas de sensibilización para los trabajadores y los empleadores que se centraron en los derechos laborales y responsabilidades, la inscripción en la seguridad social, contratos de trabajo, y el trabajo infantil.

Las sanciones por falta de pago de salarios y por violaciones de seguridad y salud oscilaban entre tres y seis veces el salario mínimo, pero éstas no fueron suficientes para disuadir dichas violaciones y rara vez se aplican. Las autoridades no siempre hacen cumplir el salario mínimo. Los trabajadores se quejaron de que los inspectores no estaban bien entrenados, no respondieron a sus quejas, y respondieron a las solicitudes de los empleadores con mayor rapidez que a las peticiones de los trabajadores. En el sector azucarero, por ejemplo, se siguieron recibiendo informes de deficiencias en los procedimientos y metodologías en las inspecciones realizadas por el Ministerio, incluyendo las entrevistas a pocos o a ningún trabajador; incapacidad para discutir temas relacionados con el cumplimiento de la legislación laboral con los trabajadores; entrevistas a los trabajadores con representantes de los empresarios presentes; contratación insuficiente de inspectores con habilidades lingüísticas, en particular con conocimientos del Creole, idioma necesario para comunicarse de manera efectiva con los trabajadores; falta de seguimiento a las denuncias de violaciones del derecho

laboral hechas por los trabajadores durante el proceso de inspección; y no darle seguimiento para verificar si hubo progreso en las violaciones identificadas. FEDOTRAZONAS informó que el Gobierno no supervisó con eficiencia las normas de seguridad y de salud en el trabajo, y no sancionó las violaciones identificadas.

Las horas extraordinarias obligatorias eran una práctica común en las fábricas, y en ocasiones se le hacían descuentos a los salarios o se cancelaban a los empleados que se negaban a trabajar. FEDOTRAZONAS informó que algunas empresas mantienen horarios de trabajo conocidos como "cuatro por cuatro", en las que los empleados trabajan turnos de 12 horas por cuatro días. En algunos casos, los empleados que trabajaron bajo el horario de cuatro por cuatro no recibieron el pago por las horas extraordinarias trabajadas por encima de la jornada máxima de trabajo permitida por las leyes laborales. Algunas compañías continuaron la práctica de pagar cada ocho días, un sueldo bisemanal con el esquema cuatro por cuatro, en vez de cada siete días, un sueldo semanal bajo el esquema de 44 horas. Estas prácticas dieron como resultado un pago por debajo del salario de los trabajadores, ya que no fueron compensados por las horas extras trabajadas.

De acuerdo con un informe de la ILO, publicado en junio de 2014, el empleo informal como una porción del empleo no agrícola creció de 50 por ciento en 2011 a 51.5 por ciento en el 2012. En 2013, el Banco Central calculó que el 58 por ciento de los empleos eran informales y teorizó que esta alta tasa tenía que ver con los bajos salarios mínimos y la elasticidad laboral en la disponibilidad de mano de obra migrante barata. Los trabajadores de la economía informal enfrentaron condiciones de trabajo más precarias que los trabajadores formales, y a menudo estaban fuera del alcance de los esfuerzos realizados por el Gobierno para aplicar las regulaciones.

El 12 de noviembre, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), presidido por el Ministro de Trabajo, emitió una resolución declarando que todas las personas con estatus migratorio legal en el país tenían derecho a participar en el SDSS. El SDSS incluye beneficios médicos, indemnización en caso de lesiones y enfermedades ocupacionales, y una pensión. Antes de la nueva resolución, aquellos trabajadores que no eran dominicanos no podían

recibir los beneficios del SDSS. La resolución dispone que los empleadores, para inscribir los trabajadores elegibles y sus dependientes directos en el SDSS, demostrando que los trabajadores han regularizado su situación migratoria y que le han proporcionado a sus trabajadores actuales contratos de trabajo u otra documentación apropiada. La resolución, si se aplica correctamente, ampliaría la elegibilidad de los beneficios del SDSS a muchos trabajadores.

Las condiciones de los trabajadores agrícolas son pobres. Muchos trabajadores trabajaron largas horas, a menudo 12 horas diarias y siete días a la semana. Asimismo, son expuestos a condiciones peligrosas de trabajo, incluyendo pesticidas, exposición al sol durante largos períodos de tiempo, y utilizando herramientas cortantes y pesadas. Algunos de estos trabajadores reportaron que no se les pagó el salario mínimo legal.

Las empresas no se adhirieron a las normas laborales sobre seguridad y salud con regularidad. Por ejemplo, la Confederación Nacional de Unidad Sindical informó que las condiciones de salud y seguridad eran inseguras e inadecuadas, incluyendo la falta de ropa de trabajo adecuada y de equipos de seguridad. Reportaron vehículos sin bolsas de aire, falta de equipos de primeros auxilios, ventanas que funcionan, aire acondicionado; ventilación inadecuada en espacios de trabajo; un número insuficiente de baños; y áreas inseguras para comer.

Los accidentes provocaron daños y muertes entre los trabajadores, pero la información sobre el número de accidentes no estuvo disponible a finales de año.

En febrero, la Federación Dominicana de Trabajadores Portuarios exigió que los Ministerios de Trabajo y Finanzas realizaran una investigación en relación con el pago de beneficios de los fondos de pensiones con los nombres de miembros fallecidos. El sindicato quería una explicación del destino de los fondos de pensiones que supuestamente estaban siendo pagados a personas desconocidas bajo los nombres de unos 600 sindicalistas fallecidos. La Federación informó que cerca de RD\$4.5 millones (US\$100,000) se estaban pagando mensualmente a nombre de miembros fallecidos.